



Reforma CPEUM

Que con fecha 18 junio de 2008, fue publicada en el Diario Oficial de la Federación la reforma mediante la cual se reformaron artículos 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22; las fracciones XXI y XXIII del artículo 73; la fracción VII del artículo 115 y la fracción XIII del apartado B del artículo 123, todos de la **Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos**. Con esta reforma, el constituyente buscó transitar hacia un **sistema de justicia de corte acusatorio-adversarial**. Para ello, estableció un plazo de ocho años para que todas las instituciones involucradas realizaran las adecuaciones necesarias dentro del ámbito de sus respectivas competencias.



Se abrogan los códigos de procedimientos penales de todas las entidades federativas así del Distrito Federal de manera gradual, en fecha limite 18 de junio de 2016

La iniciativa CNPP busca

- I. Unificar la legislación procesal penal, para que los criterios políticocriminales que habrán de observarse en el procedimiento penal igualmente se unifiquen en todos sus aspectos, y así evitar que en el país haya distintas formas de procurar y administrar justicia.
- II. Que la nueva legislación procesal penal prevea los mecanismos necesarios y adecuados que permitan, por un lado, hacer efectivos los principios y garantías previstos en la Ley Fundamental, característicos del sistema procesal acusatorio; y, por el otro, hacer realidad los principios y garantías propios del derecho penal sustantivo o material de corte democrático y liberal, que igualmente tienen su base en la Constitución y que expresa o tácitamente se encuentran consagrados en los Códigos Penales.
- III. Establecer límites del poder penal y garantía de protección de los derechos humanos de los actores del juicio penal, así como brindar a la sociedad un sistema penal que garantice de manera más efectiva la protección de sus bienes jurídicos frente al delito, que se combata eficazmente la delincuencia y la inseguridad pública provocada por ésta, y que se combata la impunidad y la corrupción, entre otros males que aquejan al sistema.



IV. Considerar la realidad socio-cultural, política, económica y jurídica de la nación mexicana y de cada una de las entidades federativas en particular, para que la reforma sea una respuesta a sus necesidades. Si bien el legislador mexicano debe tomar en cuenta las experiencias del derecho penal y procesal penal comparado, no debe simplemente trasplantar algún modelo procesal ajeno; debe esforzarse en autogenerar un modelo nacional partiendo de la base constitucional.

V. Precisar las transformaciones que tanto orgánica como funcionalmente habrán de experimentar las diversas instituciones del sistema de justicia penal, como el Ministerio Público y sus auxiliares, el Poder Judicial y el órgano encargado de la ejecución penal, así como el rol que la víctima y el defensor deben jugar en el proceso penal.

VI. Aplicar los juicios orales al mayor número de casos, sobre todo los más graves. Asimismo, sugiere el uso de las salidas alternas o la aplicación de mecanismos alternativos de solución de controversias para despresurizar el actual sobresaturado sistema penal y así generar un sistema más ágil donde los juicios orales puedan cumplir con su función.

VII. Otorgar una intervención más amplia a la víctima, al ofendido y a su asesor legal, tanto en la etapa de investigación como durante el proceso, para que aporten directamente las pruebas, **ya sea para el ejercicio de la acción penal o para la acreditación de los presupuestos necesarios para la imposición de una pena o medida de seguridad, así como para el aseguramiento o la restitución de sus derechos y el embargo precautorio para garantizar la reparación de daños y perjuicios causados por el delito.**

A manera de antecedente: Delito de defrauacion fiscal

El legislador tomó como elemento básico el grado de peligro que para la sociedad representa la conducta delictiva del agente, peligrosidad que obviamente está vinculada con la importancia que tienen para el individuo y para el grupo social en su conjunto los bienes jurídicamente tutelados por el ordenamiento. en ese tenor, el delito de defraudación fiscal calificada, previsto en el artículo 108, fracciones II o III del C.F.F., constituye (cff) un delito grave para todos los efectos legales, entre ellos, el de negar la procedencia de la libertad provisional bajo caución, en virtud de que el legislador federal atendió a la gravedad de la ofensa a los bienes jurídicos de la comunidad en general, en concreto, el erario y patrimonio públicos; sin embargo, esto último se reformo CNPP!!





El derecho penal fiscal

Es la rama del derecho público integrada por las leyes que tipifican la conducta ilícita de las personas, establecen las consecuencias jurídicas de ellas derivadas, y el procedimiento y órganos estatales para la aplicación de las penas que amerita dicha conducta.

El criterio anterior va cediendo su lugar a otro para definir esta rama jurídica **como un derecho rehabilitador o de readaptación** de los sujetos de la conducta calificada de ilícita.

La ilicitud constituye, en sentido amplio, el calificativo de una conducta que en la materia fiscal se manifiesta en infracciones y u o en delitos.



Las infracciones o los delitos fiscales pueden ser tanto de ejecución como de omisión; ambos punibles.

Es muy frecuente la ilicitud por omisión, que consituyen las infracciones; diríase que estas infracciones cubren la casi totalidad de las violaciones a las leyes respectivas

En el derecho penal fiscal más que la rehabilitación del delincuente interesa punir aflictiva o represivamente, intimidar a los posibles futuros infractores y producir escarmiento

El derecho penal fiscal se encuentra contenido en diversas leyes, si bien el C.F.F., es la más importante de todas ellas

En este derecho lo más importante es la protección del interés económico del Estado.

Para Augusto. Fernández Sagardi, el estudio de las infracciones en materia fiscal se encuentra dentro del estudio del Derecho Penal y no el fiscal; es el estudio de una parte representativa de conductas ilícitas. El contribuyente que comete ilícitos tributarios puede ser sancionado con penas corporales o con penas pecuniarias; del sustantivo “pena” deriva la denominación de esta rama del derecho

Los elementos del delito son los mismos que las infracciones ,al grado que parafraseando la definición podemos decir que la infracción administrativa es la conducta típica, culpable, antijurídica y punible con pena pecuniaria y algunas ocasiones con cláusula preventiva.



Titulo IV de las infracciones y delitos CFF

Artículo. 92 requisitos de procedibilidad

Artículo. 93 denuncia

Artículo. 95 responsables

Artículo. 96 encubrimiento

Artículo. 97 funcionario o empleado publico como sujeto **activo**

Artículo. 99 delito continuado

Artículo. 100 prescripcion

Artículo. 98 tentativa

Artículo. 101 beneficios, sustitucion y conmutacion de sanciones.

Artículo. 102 delitos de contrabando

Artículo. 103 presuncion del delito de contrabando



Artículo. 105 personas que tambien son sancionadas con penas del contrabando

Artículo. 106 mercancías de uso personal

Artículo. 107 contrabando calificado

Artículo. 108 DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL

Artículo. 109 PERSONAS QUE COMETEN DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL

Artículo. 110 pena por infracciones sobre el rfc

Artículo. 111 pena por delitos relacionados con la presentacion de declaraciones o con la contabilidad

Artículo. 112 pena para depositarios o interventores

Artículo. 113 sanción por alterar o destruir aparatos de control, sellos, maquinas registradoras, comprobantes fiscales etc.

Artículo. 114 pena a servidores publicos que amenacen con formular denuncia, querella o declaratoria.

Artículo. 115 pena por robar o destruir mercancías en recinto fiscal o fiscalizado



La aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones fiscales y penas.

Artículo 70.- La aplicación de las multas, por infracciones a las disposiciones fiscales, se hará independientemente de que se exija el pago de las contribuciones respectivas y sus demás accesorios, así como de las penas que impongan las autoridades judiciales cuando se incurra en responsabilidad penal.

Cuando las multas no se paguen en la fecha establecida en las disposiciones fiscales, el monto de las mismas se actualizará desde el mes en que debió hacerse el pago y hasta que el mismo se efectué, en los términos del Artículo 17-A de este Código.



¿Qué se entiende por infracción y qué por delito en materia fiscal? y ¿Qué responsabilidad se sigue de unas y de otros?

Infracción, es la violación de una ley.

Delito es el acto u omisión que sancionan las leyes penales; es decir, es una infracción que de acuerdo con el derecho, amerita una pena corporal.

La infracción es el género de lo ilícito, el delito es una especie de ese género la infracción fiscal, según el artículo 70 del CFF amerita una pena económica, en forma de multa; el delito amerita pena corporal; la multa la aplica la autoridad fiscal, la pena corporal, la autoridad judicial.

El mismo Código hace enunciado de las infracciones y de los delitos fiscales y señala en cada caso la pena que los responsables de estos ilícitos han de sufrir.

Lícitos Fiscales

Los ilícitos fiscales se han dividido en simples y calificados. El delito o infracción son calificados cuando en su ejecución han existido agravantes, atenuantes o excluyentes, en caso contrario se consideran simples. Es frecuente hablar de ilícitos calificados sólo cuando en su ejecución mediaron agravantes.

Agravante es la circunstancia que aumenta la punibilidad del delito o de la infracción; atenuante es la circunstancia que disminuye tal punibilidad y excluyente la que la elimina.

La calificación de las conductas ilícitas la señala la ley. En materia fiscal, las penas son económicas o de otra naturaleza; si existiesen agravantes, la pena económica sería de mayor cuantía y la corporal sería de mayor duración; si existiesen atenuantes, dichas penas serían menores; y se eliminarían si hubiese excluyentes.



Art 108 CFF que sirven de referente para determinar las penas a imponer al sujeto activo del delito de defraudación fiscal.

Nuestras leyes marcan ejemplos de las tres calificaciones; así el artículo 76 del CFF señala varios casos de atenuantes y de agravantes de infracciones, en tanto que el 73 señala un caso de excluyente, caso fortuito o fuerza mayor y el cumplimiento espontáneo.

Por lo que mira a delitos, el artículo 107 del mismo ordenamiento alude al contrabando que llama calificado, o realizado con agravantes.

En esta forma, resulta sencillo saber cuándo se consideran simples los ilícitos fiscales, pues son los no calificados

Artículo 167 CNPP. Se consideran delitos que ameritan prisión oficiosa, los previstos en el código penal federal. Curiosamente no se encuentra la defraudación fiscal a que se refiere los Art. 108 y 109 CFF como antes se establecía como delito grave.

La configuración de la defraudación fiscal calificada como delito grave en el código federal de procedimientos penales de 1934. quedo **abrogado**.

Antecedentes:

El artículo 194 del Código Federal de Procedimientos Penales, publicado en el D.O.F. el 30 de agosto de 1934, abrogado el día 18 de junio de 2016, establecía respecto del delito de defraudación fiscal lo siguiente:

Artículo 194. Se califican como delitos graves, para todos los efectos legales, por afectar de manera importante valores fundamentales de la sociedad, los previstos en los ordenamientos legales siguientes:

...

VI Del C.F.F., los delitos siguientes:

...

2) Defraudación fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108 y 109, cuando el monto de lo defraudado se ubique en los rangos a que se refieren las fracciones II o III del artículo 108, exclusivamente cuando sean calificados.

Casos de prisión preventiva oficiosa en el código nacional de procedimientos penales.

Artículo 167, Tercer Párrafo.

" El juez de control en el ámbito de su competencia, ordenará la **prisión preventiva oficiosamente** en los casos de **DELINCUENCIA ORGANIZADA, HOMICIDIO DOLOSO, VIOLACIÓN, SECUESTRO, TRATA DE PERSONAS**, así como los delitos graves que determine la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud.

Las leyes generales de salud, secuestro y trata de personas establecerán los supuestos que amerita prisión preventiva oficiosa.

De delincuencia organizada establecerá los supuestos que ameriten prisión preventiva oficiosa.

Delitos del código penal federal que ameritan prisión oficiosa

Quinto párrafo del artículo 167 Código Nacional de Procedimientos Penales.

Se consideran delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, los previstos en el Código Penal Federal de la manera siguiente:

I. **Homicidio doloso** previsto en los artículos 302 en relación al 307, 313, 315, 315 Bis, 320 y 323;

II. **Genocidio**, previsto en el artículo 149 Bis;

III. **Violación** prevista en los artículos 265, 266 y 266 Bis;

IV. **Traición a la patria**, previsto en los artículos 123, 124, 125 y 126;

V. **Espionaje**, previsto en los artículos 127 y 128;

VI. **Terrorismo**, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter;

VII. **Sabotaje**, previsto en el artículo 140, párrafo primero;

VIII. Los previstos en los artículos 142, párrafo segundo y 145;

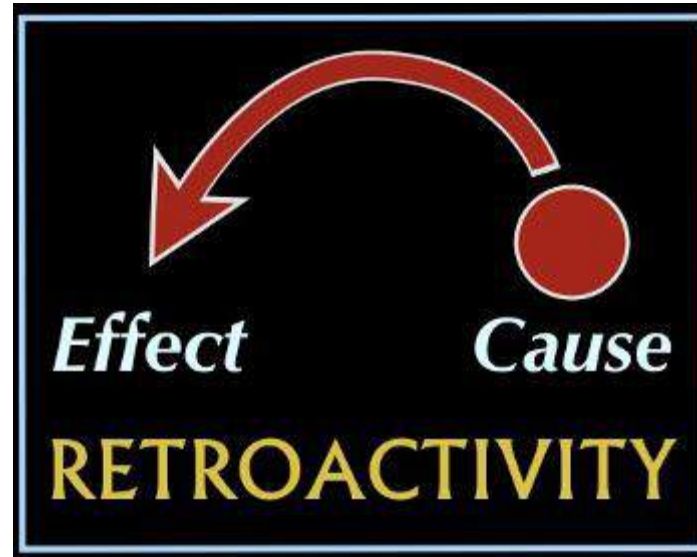
IX. Corrupción de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 201; **Pornografía** de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 202; **Turismo sexual** en contra de personas menores de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en los artículos 203 y 203 Bis; **Lenocinio de personas menores** de dieciocho años de edad o de personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho o de personas que no tienen capacidad para resistirlo, previsto en el artículo 204 y **Pederastia**, previsto en el artículo 209 Bis;

X.Tráfico de menores, previsto en el artículo 366 Ter;

XI.Contra la salud, previsto en los artículos 194, 195, 196 Bis, 196 Ter, 197, párrafo primero y 198, parte primera del párrafo tercero.

El juez no impondrá la prisión preventiva oficiosa y la sustituirá por otra medida cautelar, únicamente cuando lo solicite el Ministerio Público por no resultar proporcional para garantizar la comparecencia del imputado en el proceso, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima y de los testigos o de la comunidad. Dicha solicitud deberá contar con la autorización del titular de la Procuraduría o el funcionario que en él delegue esa facultad

El quinto transitorio del Decreto presidencial del 17 de junio de 2106 al CNPP establece “retroactividad favorable al inculpado”.



(Edición Vespertina) DIARIO OFICIAL Viernes 17 de junio de 2016

PODER EJECUTIVO SECRETARIA DE GOBERNACION DECRETO por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que Intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del Artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, del C.F.F., y de la Ley de Instituciones de Crédito. Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Presidencia de la República. ENRIQUE PEÑA NIETO, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a sus habitantes sabed: Que el Honorable Congreso de la Unión, se ha servido dirigirme el siguiente DECRETO

- Artículo Segundo.- Se reforman los artículos 7o., fracción I del tercer párrafo; 16; 25; 27, primer y último párrafos; 29, último párrafo; 34, primer y último párrafos; 35, cuarto párrafo; 38; 40; 50 Bis, primer párrafo; 55, primero y tercer párrafos; 56; 64; 65, segundo párrafo; 71, segundo párrafo; 74, primer párrafo; 75; 76; 77; 87; la denominación del Título Quinto, Capítulo I del Libro Primero; 91; 93, cuarto párrafo; 97, primer párrafo; 99; 101, segundo y tercer párrafos; 110, primer y tercer párrafos; 114; 115, primer párrafo; la denominación del Capítulo VIII del Título Quinto del Libro Primero; 225, fracciones IX, X, XII, XIV, XVI, XVII, XIX, XXI, XXVII, XXVIII, XXX, XXXI y XXXII; **se adicionan los artículos 11 Bis**; un segundo párrafo al artículo 55, recorriéndose en su orden los subsecuentes; un cuarto párrafo al artículo 211 Bis 2; se derogan el quinto párrafo del artículo 35; el cuarto y sexto párrafos del artículo 55; el artículo 90 Bis y las fracciones XI y XIII del artículo 225, del Código Penal Federal, para quedar como sigue:

Artículo 11 Bis.- Para los efectos de lo previsto en el Título X, Capítulo II, del Código Nacional de Procedimientos Penales, a las personas jurídicas **podrán imponérseles algunas o varias de las consecuencias jurídicas** cuando hayan intervenido en la comisión de los siguientes delitos:

A. De los previstos en el presente Código: I. Terrorismo, previsto en los artículos 139 al 139 Ter y terrorismo internacional previsto en los artículos 148 Bis al 148 Quáter; II. Uso ilícito de instalaciones destinadas al tránsito aéreo, previsto en el artículo 172 Bis;



B. De los delitos establecidos en los siguientes ordenamientos:

I.

(...)

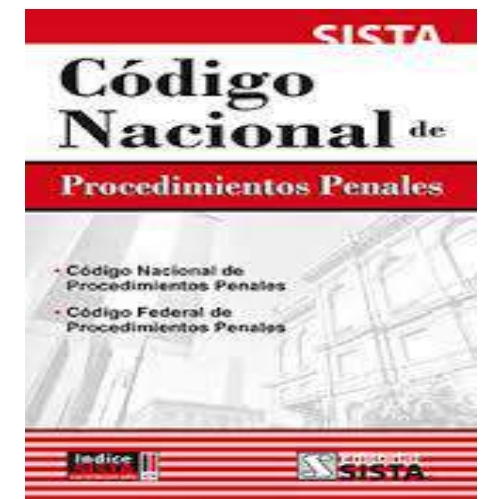
VII. Contrabando y su equiparable, previstos en los artículos 102 y 105 del C.F.F.;

VIII. Defraudación Fiscal y su equiparable, previstos en los artículos 108 y 109, del C.F.F.; IX. De la Ley de la Propiedad Industrial, los delitos previstos en el artículo 223;

CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES

Artículo 2o. Objeto del Código

Este código tiene por objeto establecer las normas que han de observarse en la investigación, el procesamiento y la sanción de los delitos, para esclarecer los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune y que se repare el daño, y así contribuir a asegurar el acceso a la justicia en la aplicación del derecho y resolver el conflicto que surja con motivo de la comisión del delito, en un marco de los derechos humanos reconocidos en la constitución y en los tratados internacionales de los que el estado mexicano sea parte.



CNPP Artículo 4o. Características y principios rectores

El proceso penal será acusatorio y oral, en él se observarán los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación y aquellos previstos en la constitución, tratados y demás leyes.

Este código y la legislación aplicable establecerán las excepciones a los principios antes señalados, de conformidad con lo previsto en la constitución. en todo momento, las autoridades deberán respetar y proteger tanto la dignidad de la víctima como la dignidad del imputado.





Para el desarrollo del presente curso, me apoyare de Tesis y Jurisprudencias para facilitar y ahondar en las interpretaciones judiciales respecto los delitos fiscales.



Tesis y jurisprudencias del Poder Judicial

Las épocas son las etapas cronológicas en las que la SCJN agrupa los criterios publicados en el semanario judicial de la federación. Se dividen en dos grandes periodos: **antes y después de la constitución política de los estados unidos mexicanos, de 1917.**

La creación del semanario judicial de la federación, se originó mediante el decreto del 8 de diciembre de 1870 del entonces presidente de la república Benito Juárez García, y que desde esa fecha, hasta el día de hoy, la jurisprudencia contenida en sus páginas se distingue en dos grandes rubros: la jurisprudencia histórica y la jurisprudencia vigente.

Los criterios de la primera a la cuarta época, por ser anteriores a la vigencia del texto fundamental de 1917, hoy son inaplicables, es decir, carecen de vigencia y por tanto, se agrupan dentro de lo que se denomina "jurisprudencia histórica".



Los criterios de las épocas quinta a la novena, es decir, de 1917 a la fecha, integran el catálogo de la llamada comúnmente "**jurisprudencia aplicable**" o vigente. es importante destacar que no por el hecho de que un criterio pertenezca a este último periodo, necesariamente implica que tiene vigencia y es aplicable, ya que esos atributos están supeditados a múltiples factores, entre ellos, que su vigencia no haya sido interrumpida de acuerdo a lo establecido en la normativa aplicable o bien, que el criterio no haya sido superado en virtud de la resolución de una contradicción de tesis.

No existe un criterio uniforme que defina cuándo debe cambiarse de época.

Derechos Humanos como Principio Rector del Derecho Penal

La instauración del nuevo procedimiento penal acusatorio en nuestro país implementó diversos cambios tanto jurídicos, administrativos, académicos, tecnológicos, entre otras más, con el fin de adecuar el nuevo sistema del cual se espera sea más eficiente en la procuración e impartición de justicia, pues persigue que los veredictos sean apegados a los nuevos **principios procesales**. Procurando que las víctimas u ofendidos no queden impunes y, se cumpla con la reparación del daño.

Principio general

Cualquier acto realizado con violación de **DERECHOS HUMANOS** será nulo y no podrá ser saneado, ni convalidado y su nulidad deberá ser declarada de oficio por el Órgano jurisdiccional al momento de advertirla o a petición de parte en cualquier momento.

En este contexto, el delito de Defraudación Fiscal ha sido desincorporado del catálogo de delitos graves en el Código Nacional de Procedimientos Penales (CNPP).per se trae consecuencias para los grupos delictivos.

Los siguientes presedentes judiciales contienen un derecho sustantivo que debe aplicarse ultractivamente a favor del gobernado, en cumplimiento al principio de exacta aplicación de la Ley Penal.

DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA ACTUALIZACIÓN DE SU MONTO SEÑALADO EN LAS FRACCIONES DEL ARTÍCULO 108 DEL C.F.F., CONFORME AL PROCEDIMIENTO ESTABLECIDO EN SU DIVERSO PRECEPTO 17-A, CONSTITUYE UNA MODIFICACIÓN A AQUELLA DISPOSICIÓN, QUE ES APLICABLE RETROACTIVAMENTE A FAVOR DEL INculpADO PARA ADECUAR LA PENA, EN RESPETO Y PROTECCIÓN A SU DERECHO HUMANO DE RETROACTIVIDAD DE LA LEY EN SU BENEFICIO.

Los artículos 14, párrafo primero, de la Constitución Federal, 9 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, 56 del Código Penal Federal y 553 del Código Federal de Procedimientos Penales contienen, el primero, el principio de retroactividad de la ley en beneficio del gobernado y, los restantes, el diverso de aplicación de la ley más favorable al inculpado o sentenciado, aun en extinción de la pena, al prever en cuanto al tema de las sanciones que, si con posterioridad a la comisión del delito e inclusive durante la extinción de la pena la ley dispone la imposición de una más leve o entrare en vigor una nueva legislación o reforma, se estará a lo previsto en la más benigna al imputado, ya sea de oficio o a solicitud de éste. En este sentido, debe interpretarse que puede existir tal modificación de la ley que redunde en beneficio del enjuiciado, derivado de la actualización a que alude el artículo 17-A del C.F.F., respecto de las cantidades señaladas en las fracciones de su diverso numeral 108, que sirven de referente para determinar las penas a imponer al sujeto activo del delito de defraudación fiscal, dado que si bien ese reajuste de montos no lo realiza el legislador periódicamente, sino el jefe del Servicio de Administración Tributaria de acuerdo a la situación económica del país, (...)

...ello no conduce a estimar que no exista un cambio en la ley fiscal, porque aun cuando las penas establecidas en el citado numeral 108 no han sido modificadas, sí se actualizan los montos mínimo y máximo de las cantidades de lo defraudado, los cuales dicha autoridad administrativa informa en misceláneas fiscales (anexos) del ejercicio respectivo, que se publican en el Diario Oficial de la Federación; por lo que al integrarse o incorporarse las actualizaciones de esas cantidades al citado código, pasan a formar parte de dicho ordenamiento para su operatividad, sirviendo de parámetro para determinar las penas a imponer a los sujetos activos de delitos fiscales, lo cual implica, por extensión, que su aplicación retroactiva pueda incidir favorablemente en casos de adecuación de las penas; con lo cual se adopta la interpretación más favorable, en respeto y protección al derecho humano de retroactividad de la ley en beneficio del inculpado.

Esta tesis se publicó el viernes 16 de mayo de 2014 a las 11:00 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

La Época: Décima Época

Registro: 2006447

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Libro 6, Mayo de 2014, Tomo III

Materia(s): Constitucional, Penal

Tesis: I.5o.P.11 P (10a.)

Página: 1978

SANCIÓN PECUNIARIA TRATÁNDOSE DE DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 94 DEL C.F.F., DEROGADO MEDIANTE DECRETO PUBLICADO EN EL DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACIÓN EL 28 DE JUNIO DE 2006, AL PREVER QUE LA AUTORIDAD JUDICIAL NO IMPONDRÁ AQUÉLLA, CONTIENE UN DERECHO SUSTANTIVO QUE DEBE APLICARSE ULTRACTIVAMENTE A FAVOR DEL GOBERNADO, EN CUMPLIMIENTO AL PRINCIPIO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY.

Si se tiene en cuenta que la disposición de no imponer sanciones pecuniarias en los delitos fiscales, prevista en el artículo 94 del C.F.F., derogado mediante Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 28 de junio de 2006, es un derecho sustantivo del gobernado y no una cuestión meramente adjetiva o procesal, al involucrar una prohibición a la facultad de la autoridad judicial de imponer sanciones, que conforme a los artículos 24 y 29 del Código Penal Federal, constituyen las penas y medidas de seguridad que incluyen la multa y la reparación del daño, es indudable que al artículo primeramente citado le es aplicable el principio de exacta aplicación de la ley vigente en el momento de cometerse el hecho delictivo, que emana del segundo párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en cuanto a la aplicación ultractiva de la ley a favor del indiciado, procesado, acusado o sentenciado. Lo anterior significa que al resolver sobre el particular debe aplicarse la ley más benéfica, de manera que si el delito fiscal se cometió durante la vigencia del precepto derogado, éste debe aplicarse ultractivamente a favor del gobernado, dado que otorga el beneficio a no ser sancionado pecuniariamente por la autoridad judicial. Lo anterior sin conceder que en aplicación ultractiva del artículo derogado, las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, podrán hacer efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello afecte el procedimiento penal.

Contradicción de tesis 65/2010. Entre las sustentadas por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito y el Tercer Tribunal Colegiado del Décimo Segundo Circuito. 8 de septiembre de 2010. Cinco votos. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretario: Rogelio Alberto Montoya Rodríguez.

Tesis de jurisprudencia 87/2010. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha veintisiete de octubre de dos mil diez.

Época: Novena Época

Registro: 163001

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo XXXIII, Enero de 2011

Materia(s): Penal

Tesis: 1a./J. 87/2010

Página: 423

Derecho al respeto a la libertad personal

Toda persona tiene derecho a que se respete su libertad personal, por lo que nadie podrá ser privado de la misma, sino en virtud de mandamiento dictado por la autoridad judicial o de conformidad con las demás causas y condiciones que autorizan la Constitución y CNPP

La autoridad judicial sólo podrá autorizar como medidas cautelares, o providencias precautorias restrictivas de la libertad, las que estén establecidas en el CNPP y en las leyes especiales. La prisión preventiva será de carácter excepcional y su aplicación se regirá en los términos previstos en CNPP

El Ministerio Público podrá solicitar la cancelación de una orden de aprehensión o la reclasificación de la conducta o hecho por los cuales hubiese ejercido la acción penal, cuando estime su improcedencia por la aparición de nuevos datos.



www.imefi.com



La siguiente tesis aislada pone de manifiesto el sobreseimiento de procesos seguidos por delitos fiscales, los cuales requieren petición expresa de la secretaría de hacienda y crédito público.



SOBRESEIMIENTO DE PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS FISCALES. REQUIERE PETICIÓN EXPRESA DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO.

El artículo 92, fracción III, párrafo segundo, del C.F.F., prevé que procede el sobreseimiento del proceso penal respectivo, a petición expresa de la mencionada ofendida, siempre y cuando el encausado haya pagado las contribuciones y los recargos respectivos, o cuando los créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría; por tanto, para decretarlo, no procede la aplicación del artículo 93, párrafo segundo, del Código Penal Federal, que establece la extinción de la acción penal, ante el perdón del ofendido, esto es, cuando existe manifestación de quien está autorizado para ello de que el interés afectado ha sido satisfecho, puesto que no resulta aplicable supletoriamente a la disposición del C.F.F. aludida, pues en esta materia, para considerar que se otorgó el perdón del ofendido es necesario que ello se exteriorice expresamente por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, puesto que se trata de una facultad discrecional, y no así de una obligación exigible por parte del activo de esa clase de antisociales, esto es, la ofendida tiene libre albedrío para decidir si aun cubiertos tales adeudos, resulta oportuno se continúe con el proceso instaurado y se sancione penalmente al responsable; por tanto, atento al principio de especialidad, conforme al cual la norma especial suple a la general, deberá prevalecer la aplicación del precepto legal mencionado en la ley especial, conforme al artículo 6o., párrafo segundo, del código sustantivo invocado.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 7/2012. 31 de mayo de 2012. Mayoría de votos. Disidente: José Luis González. Ponente: María de los Ángeles Estrada Sedano, secretaria de tribunal autorizada en términos del artículo 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Omar Humberto Romero Romero.

Época: Décima Época

Registro: 2002408

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XV, Diciembre de 2012, Tomo 2

Materia(s): Penal

Tesis: III.2o.P.6 P (10a.)

Página: 1564

PETICIÓN DE SOBRESEIMIENTO DE PROCESOS SEGUIDOS POR DELITOS FISCALES. AL FORMULARLA LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO EJERCE UN DERECHO Y NO UNA FACULTAD, POR LO QUE NO ES NECESARIO QUE FUNDE Y MOTIVE ESA DECISIÓN. En términos del artículo 92, fracción III, tercer párrafo, del Código Fiscal de la Federación, para proceder penalmente por los delitos fiscales es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule querrela y, en su caso, los procesos se sobreseerán previa petición que discrecionalmente realice. Dicha petición de sobreseimiento constituye un "perdón del ofendido", motivo por el cual se formula sin atribuciones de imperio, ni de autoridad, sino como representante de los intereses patrimoniales del Estado (ofendido por el delito), lo que procesalmente implica que, al hacerla, está ejerciendo un derecho y no una facultad que deba fundar y motivar.

Amparo en revisión 783/2010. Martín Camargo Hernández. 23 de febrero de 2011. Mayoría de cuatro votos. Disidente: José Ramón Cossío

Díaz. Ponente: Guillermo I. Ortiz Mayagoitia. Secretario: Pedro Arroyo Soto •

Aplicación de la prisión preventiva

Sólo por delito que merezca pena privativa de libertad habrá lugar a prisión preventiva. La prisión preventiva será **ordenada** conforme a los términos y las condiciones de este Código.

La prisión preventiva no podrá exceder del tiempo que como máximo de pena fije la ley al delito que motivare el proceso y en ningún caso será superior a **dos años**, salvo que su prolongación se deba al ejercicio del derecho de defensa del imputado. Si cumplido este término no se ha pronunciado sentencia, el imputado será puesto en libertad de inmediato mientras se sigue el proceso, sin que ello obste para imponer otras medidas cautelares.



Artículo 225. querella u otro requisito equivalente

La querella es la expresión de la voluntad de la víctima u ofendido o de quien legalmente se encuentre facultado para ello, mediante la cual manifiesta expresamente ante el Ministerio Público su pretensión de que se inicie la investigación de uno o varios hechos que la ley señale como delitos y que requieran de este requisito de procedibilidad para ser investigados y, en su caso, se ejerza la acción penal correspondiente.

Deber de denunciar

Toda persona a quien le conste que se ha cometido un hecho probablemente constitutivo de un delito está obligada a denunciarlo ante el Ministerio Público y en caso de urgencia ante cualquier agente de la Policía. Artículo 222.

Características de la denuncia

- Procede en delitos de oficio
- La representación es a través del Ministerio Público
- Cualquier persona puede denunciar
- No procede el perdón, ya que el castigo es a juicio del Estado no del ofendido
- Es una obligación para la autoridad establecida en la ley el iniciar la averiguación (por sí mismos) o para los particulares poner en conocimiento de la autoridad cuando se tenga noticia de un delito de esa naturaleza.

Cadena de custodia

La cadena de custodia es el sistema de control y registro que se aplica al indicio, evidencia, objeto, instrumento o producto del hecho delictivo, desde su localización, descubrimiento o aportación, en el lugar de los hechos o del hallazgo, hasta que la autoridad competente ordene su conclusión.

Con el fin de corroborar los elementos materiales probatorios y la evidencia física, la cadena de custodia se aplicará teniendo en cuenta los siguientes factores: identidad, estado original, condiciones de recolección, preservación, empaque y traslado; lugares y fechas de permanencia y los cambios que en cada custodia se hayan realizado; igualmente se registrará el nombre y la identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos.



Cadena de custodia



Antecedentes del tipo penal de defraudación fiscal en México

Al reformarse el CFF con fecha 31 de diciembre de 1948, éste se adicionó con el título sexto al anterior CFF de 1938. Este título fue denominado de los delitos, con disposiciones penales tanto sustantivas como adjetivas, donde aparece regulado el delito de defraudación fiscal y por tal motivo con ello resultó derogada la ley mencionada

Con fecha 19 de enero de 1967 se publicó un nuevo C.F.F, que inició su vigencia el 1ro de abril de 1967, donde el título sexto del código anterior se ubicó en el capítulo del título II, a continuación del capítulo dedicado a las infracciones fiscales.

El delito de defraudación fiscal aparece definido en el artículo 71 que a la letra decía:
comete el delito de defraudación fiscal quien haga uso de engaños o aproveche errores, para omitir total o parcialmente el pago de algún impuesto.

Para esas fechas el delito de defraudación fiscal por el principio de exacta aplicación de la ley penal sólo comprendía a los impuestos, situación que el actual delito ya remedió al emplear el término contribución en lugar de impuesto.



El primero de enero de 1983 inició la vigencia del actual CFF, expedido por decreto del 30 de diciembre de 1981, donde lo relativo a la materia de los delitos fiscales se reguló y ubicó en el capítulo II del título IV dedicado a las infracciones y delitos fiscales”.

Por otra parte tenemos que el delito del que hablamos se encuentra previsto en el CFF en su rango de ley especial que por disposición del artículo 6to del Código Penal Federal, deberá aplicarse de manera preferente el Código Tributario.

El C.F.F. actual se configura como ley especial

El Código Penal Federal (CPF), establece en su artículo 6, que cuando se cometa un delito no previsto en dicho Código, pero si en una ley especial, o en un tratado internacional de observancia obligatoria en México, se aplicarán estos, tomando en cuenta las disposiciones de los libros primero y segundo, del mismo Código. Así es que, C.F.F , debe interpretarse como Ley Especial en cuanto a su Capítulo II, de Delitos Fiscales, teniendo prioridad en su aplicación, y en lo no previsto en él, será de aplicación la Ley General conforme a la regla ya citada.

ARTICULO 108 CFF

“Comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omite total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal”



- I. Con prisión de tres meses a dos años, cuando el monto de lo defraudado no exceda de \$1,540,350.00.
- II. Con prisión de dos años a cinco años cuando el monto de lo defraudado exceda de \$1,540,350.00 pero no de \$2,310,520.00.
- III. Con prisión de tres años a nueve años cuando el monto de lo defraudado fuere mayor de \$2,310,520.00.

Cuando no se pueda determinar la cuantía de lo que se defraudó, la pena será de tres meses a seis años de prisión.

Si el monto de lo defraudado es restituido de manera inmediata en una sola exhibición, la pena aplicable podrá atenuarse hasta en un cincuenta por ciento.

(...)

(...)

el delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 del CFF, serán calificados cuando se originen por:

a) Usar documentos falsos.

b) Omitir reiteradamente la expedición de comprobantes por las actividades que se realicen, siempre que las disposiciones fiscales establezcan la obligación de expedirlos. Se entiende que existe una conducta reiterada cuando durante un período de cinco años el contribuyente haya sido sancionado por esa conducta la segunda o posteriores veces.

c) Manifestar datos falsos para obtener de la autoridad fiscal la devolución de contribuciones que no le correspondan.

- d) No llevar los sistemas o registros contables a que se esté obligado conforme a las disposiciones fiscales o asentar datos falsos en dichos sistemas o registros.
- e) Omitir contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas.
- f) Manifestar datos falsos para realizar la compensación de contribuciones que no le correspondan.
- g) Utilizar datos falsos para acreditar o disminuir contribuciones.
- h) Declarar pérdidas fiscales inexistentes.

delitos calificados, la pena que corresponda se aumentará en una mitad

No se formulará querrela si quien hubiere omitido el pago total o parcial de alguna contribución u obtenido el beneficio indebido, **lo entera** espontáneamente con sus recargos y actualización antes de que la autoridad fiscal descubra la **omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.**

Se tomará en cuenta el monto de las contribuciones defraudadas en un mismo ejercicio fiscal, aun cuando se trate de contribuciones diferentes y de diversas acciones u omisiones. Lo anterior no será aplicable tratándose de pagos provisionales.



Artículo 93 C.F.F.-Cuando una autoridad fiscal tenga conocimiento de la probable existencia de un delito de los previstos en este Código y sea perseguible de oficio, de inmediato lo hará del conocimiento del Ministerio Público Federal para los efectos legales que procedan, aportándole las actuaciones y pruebas que se hubiere allegado.

información de hechos u omisiones que se hayan detectado en las visitas electrónicas

Artículo 42 CFF (...)

Las autoridades fiscales podrán ejercer sus facultades de **comprobación de manera conjunta, indistinta, o sucesivamente**, entendiéndose que se inician con el primer acto que se notifique al contribuyente.

Es importante destacar que tratándose de **revisiones de gabinete, visitas domiciliarias y revisiones electrónicas**, opera la regla siguiente:

Las autoridades fiscales que estén ejerciendo facultades detecten hechos u omisiones que puedan entrañar un incumplimiento en el pago de contribuciones, **deberán informar por medio de buzón** tributario al contribuyente, **en un plazo de al menos 10 días** hábiles previos al levantamiento de la última acta parcial, del oficio de observaciones o de la resolución definitiva en el caso de revisiones electrónica, el derecho que tienen para acudir a las oficinas que estén llevando a cabo el procedimiento de que se trate, **para conocer los hechos y omisiones que hayan detectado**.

Medios electrónicos CNPP

Artículo 51. Utilización de medios electrónicos Durante todo el proceso penal, se podrán utilizar los medios electrónicos en todas las actuaciones para facilitar su operación, incluyendo el informe policial; así como también podrán instrumentar, para la presentación de denuncias o querellas en línea que permitan su seguimiento.

Artículo 143. Resolución sobre solicitud de orden de aprehensión o comparecencia El Juez de control resolverá la solicitud de orden de aprehensión o comparecencia en audiencia, o a través del sistema informático; en ambos casos con la debida secrecía, y se pronunciará sobre cada uno de los elementos planteados en la solicitud. En el primer supuesto, la solicitud deberá ser resuelta en la misma audiencia, que se fijará dentro de las veinticuatro horas a partir de la solicitud, exclusivamente con la presencia del Ministerio Público. En el segundo supuesto, dentro de un plazo máximo de veinticuatro horas, siguientes al momento en que se haya recibido la solicitud. Artículo 151. Asistencia consular

Reforma CNPP del 18 de junio de 2016

Art 69 B inexistencia de las operaciones

El primer párrafo del artículo 69-B del C.F.F a la letra señala:

“Cuando la autoridad fiscal detecte que un contribuyente ha estado emitiendo comprobantes sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material, **directa o indirectamente**, para prestar los servicios o producir, comercializar o entregar los bienes que amparan tales comprobantes, o bien, que dichos contribuyentes se encuentren no localizados, se presumirá la inexistencia de las operaciones amparadas en tales comprobantes (**énfasis añadido**)”

1. La Autoridad comienza aplicando un cuestionario persuasivo (violación al principio de legalidad)
2. Se debe desvirtuar ante una autoridad distinta a la que realizó la visita;

ADMINISTRACION GENERAL DE AUDITORIA FISCAL FEDERAL

Administración central de verificación y evaluación de entidades federativas

3. El contribuyente aparece en la lista

Apartado A.- Notificación del OFICIO DE PRESUNCIÓN conforme a los párrafos primero y segundo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación, en relación con el artículo 69 de su Reglamento

Apartado B.- Notificación en la página de Internet del Servicio de Administración Tributaria

Apartado C.- Notificación en el Diario Oficial de la Federación

Apartado D.- Notificación del oficio de RESOLUCIÓN DEFINITIVA conforme al tercer párrafo del artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

4. Autoridad emite una resolución
5. Se lleva por cuerdas separadas,: Auditoria y Presunción 69 B
6. Conducta tipificada en el art 113 fraccion III . Se impodra de 3 meses a 6 años de prision quien expida, adquiera o enajene CFD que amparen operaciones inexistentes, falsas o actos juridicos simulados

La instrumentación de los procedimientos económico-coactivos no impide a la autoridad fiscal ejercer, conjunta o alternadamente, las acciones penales que deriven de la defraudación fiscal. Elementos que se aporten a dichos procedimientos, deberán acreditar que el causante obró mediante engaño, como se ilustra en el siguiente precedente judicial.



DEFRAUDACIÓN FISCAL. REQUISITOS PARA QUE PROCEDA LA INDAGACIÓN PENAL SIMULTÁNEA AL PROCEDIMIENTO ECONÓMICO-COACTIVO. El criterio reiterado por nuestro más Alto Tribunal, en el sentido de que la instrumentación de los procedimientos económico-coactivos no impide a la autoridad fiscal ejercer, conjunta o alternadamente, las acciones penales que deriven de la defraudación fiscal, no obsta para exigir que ello se dé sólo cuando con los elementos que se aporten a dichos procedimientos se acredite que el causante obró mediante engaño para obtener un beneficio indebido o para omitir el pago de sus contribuciones, o que, aun no mediando engaño, pudo pagar y no lo hizo, o bien, que se ha comportado habitualmente como un causante moroso, pues se debe acreditar, aun presuntivamente, el dolo que, para darse, debe proyectar todo ilícito no culposo, ya que si bien, en principio, puede considerarse un ilícito el hecho de que un causante omita presentar dentro del plazo legal su declaración de impuestos o el pago de los mismos, **sin embargo, no siempre se debe entender que ello configura el ilícito penal que nos ocupa**, ya que resulta manifiesto que no es, la penal, la vía primaria a través de la cual el Estado debe pugnar por recaudar los impuestos que corresponde cubrir a los causantes, dado que ello auspiciaría una actitud confiscatoria, no sólo de los bienes de los causantes, sino de su libertad, provocando un ambiente de franca alteración del principio de seguridad jurídica que debe regir en todo Estado de derecho.

y si bien es prioridad del Estado el propiciar que le ingresen los créditos fiscales en que se apoya el desarrollo de los fines sociales que tiene encomendados y que, por lo mismo, **tal cuestión proyecta un orden público cuyo resguardo no puede quedar al arbitrio de los gobernados**, sin embargo, también de orden público se proyecta, y en una mayor dimensión, el resguardo, por el Estado, de las garantías de seguridad jurídica que requiere la población para ser eficaz receptora de los beneficios de la debida actuación del gobierno, lo cual no se dará de auspiciarse en la actividad exactora una vía inquisitoria y confiscatoria sobrepuesta a la viabilidad de ejercer procedimientos administrativos que, al no provocar la privación primaria de la libertad del causante moroso, le permite seguir teniendo oportunidad de obtener los medios económicos para cumplir con el pago de sus contribuciones, lo que, en primera y última instancia, debe ser la finalidad sustancial de la autoridad exactora.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO QUINTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 196/2001. 29 de mayo de 2001. Unanimidad de votos. Ponente: Pedro Fernando Reyes Colín. Secretaria: Karla Gisel Martínez Martínez.

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XIV, Octubre de 2001

Página: 1109

Mediante tesis aislada del año de 2003, el Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, emitió criterio Judicial respecto al análisis gramatical de las diversas hipótesis delictivas contenidas en el artículo 108 del C.F.F.

DEFRAUDACIÓN FISCAL. EL DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL C.F.F, CONTIENE VARIAS HIPÓTESIS DELICTIVAS DISTINTAS ENTRE SÍ. El artículo 108 del C.F.F establece que comete el delito de defraudación fiscal, **quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal**

Ahora bien, de la simple interpretación gramatical del invocado precepto, es claro que se refiere a diversas hipótesis delictivas, pues es sabido que por regla gramatical, la letra "o" y la diversa "u" que la sustituye, es disyuntiva y no copulativa o conjuntiva, como lo sería la letra "y";

en consecuencia, no pueden coexistir con los mismos hechos, dado que unas excluyen a las otras; de lo contrario, se estaría recalificando la conducta. De ahí que si el tribunal responsable, para tener por acreditado el cuerpo del delito de defraudación fiscal consideró tales conductas como una sola, es clara la inexacta aplicación de la ley y evidente la violación a las garantías de legalidad, seguridad jurídica y debida fundamentación y motivación, previstas por los artículos 14 y 16 constitucionales, en perjuicio de la quejosa.

TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO SÉPTIMO CIRCUITO.

Amparo directo 132/2002. 9 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: José Manuel Rodríguez Puerto. Secretario: Ignacio Ojeda Cárdenas.

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Febrero de 2003

Página: 1042

Atendiendo a lo resuelto por el Tribunal Colegiado, el delito de defraudación fiscal contiene las hipótesis delictivas siguientes:

- 1 El uso de engaños o aprovechamiento de errores
- 2 Omitir total o parcialmente el pago de una contribución u
- 3 Obtener un lucro indebido
- 4 Con perjuicio del fisco federal

Por cuanto al uso de engaños o aprovechamiento de error debe tenerse especial cuidado en no confundir los actos de mera omisión, que no constituyen conductas delictivas, con aquellos que son producto de la simulación, engaño, maquinación, apariencia e indebida aplicación de las normas fiscales. En referencia al elemento “**engaño**” contenido en la tipificación del delito de defraudación fiscal, se comprende como <la falta de verdad en lo que se dice, hace, cree, piensa o discurre>; en tanto que por “**error**” <concepto, idea, opinión o juicio falso o equivocado> (Gran diccionario de la Lengua Española. LAROUSSE), por lo que la falta de verdad, difiere de la interpretación equivocada que tenemos sobre algo, el elemento de la intencionalidad o propósito se presenta a la vista.

La reparación del daño en materia penal fiscal.

La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos dispone en su artículo 20 apartado A, fracción I, que el proceso penal tendrá por objeto el esclarecimiento de los hechos, proteger al inocente, procurar que el culpable no quede impune, y que los daños causados por el delito se reparen; de similar contenido es el CNPP

que establece en su artículo 2 como uno de sus propósitos el que se repare el daño al inocente y el diverso artículo 213 del mismo ordenamiento procesal cuyos renglones expresan.

Derogación en el año 2006 el art 94 CFF

El tema de la reparación del daño en materia fiscal ha sido tratado de diferente manera en la última década 2006 -2016 puesto que en los años anteriores a 2006, se consideró que los jueces no tenían facultades para imponer sanción pecuniaria.

El artículo 94 del C.F.F., vigente en esos años decía :

"En los delitos fiscales la autoridad judicial no impondrá sanción pecuniaria"; a su vez, el numeral 29 del Código Penal Federal ya decía (como hasta la fecha), que <la sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño >, se concluyó entonces que la prohibición a los jueces para dictar la condena pecuniaria incluía ambas modalidades, <multa y reparación del daño>, por tanto el mencionado artículo 92, párrafo cuarto, del C.F.F., que a la fecha sigue estableciendo la facultad para que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público pueda hacer la cuantificación del daño o perjuicio para efectos de poder conceder la libertad provisional en el procedimiento penal, - **excepto tratándose de delitos graves-, transgredía la garantía establecida en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal,**

pues si el monto estimado de la reparación del daño no iba a ser materia de la condena que, en su caso, pudiera decretarse, resultaba indebido el requisito de que se garantizara ese concepto para efectos de la libertad provisional ", así que por supuesto que esta conclusión no satisfizo el interés hacendario y en ese mismo año de 2006 el legislativo derogó el mencionado artículo 94 del CFF, situación que permitió que en la actualidad los jueces < si puedan dictar en su sentencia dicha condena>.





El tema quedará ilustrado con la lectura de la jurisprudencia 37/2006 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

JURISPRUDENCIA EN MATERIA PENAL YA SUPERADA AL DEROGARSE EN EL AÑO DE 2006, EL ARTÍCULO 94 CFF.

LIBERTAD PROVISIONAL BAJO CAUCIÓN. EL ARTÍCULO 92, PÁRRAFO CUARTO, DEL C.F.F., TRANSGREDE EL ARTÍCULO 20, APARTADO A, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL AL CONDICIONAR ESE BENEFICIO AL PAGO DE UNA GARANTÍA POR EL MONTO ESTIMADO DEL DAÑO O PERJUICIO FISCAL, INCLUYENDO LAS CONTRIBUCIONES ADEUDADAS, ACTUALIZACIÓN Y RECARGOS. El mencionado precepto legal establece que para conceder el beneficio de la libertad provisional, excepto tratándose de los delitos graves, el monto de la caución que fije la autoridad judicial comprenderá, en su caso, la suma de la cuantificación del daño o perjuicio determinado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, y las contribuciones adeudadas, además de la actualización y recargos que hubiera determinado la autoridad fiscal a la fecha en que se promueva dicho beneficio, entendiendo estos conceptos, en su conjunto, como el menoscabo patrimonial que trae como consecuencia el delito de defraudación fiscal. **Por otro lado, debe considerarse que como el referido artículo 92 se ubica en el capítulo II “De los delitos fiscales” del título IV “De las infracciones y delitos fiscales”, su análisis no puede hacerse de manera aislada,**

sino inmersa en el sistema que integra, por lo que resulta dable su interrelación con el artículo 94 del propio Código que prevé que en los delitos fiscales está prohibido a la autoridad judicial imponer sanción pecuniaria, así como que las autoridades administrativas, con arreglo a las leyes fiscales, harán efectivas las contribuciones omitidas, los recargos y las sanciones administrativas correspondientes, sin que ello afecte al procedimiento penal, y si además el artículo 29 del Código Penal Federal establece que la sanción pecuniaria comprende la multa y la reparación del daño, **se concluye que la prohibición de que se trata incluye ambas modalidades, por tanto el mencionado artículo 92, párrafo cuarto, del C.F.F., transgrede la garantía establecida en beneficio del procesado en el artículo 20, apartado A, fracción I, de la Constitución Federal**, pues si el monto estimado de la reparación del daño no va a ser materia de la condena que, en su caso, pudiera decretarse, resulta indebido el requisito de que se garantice ese concepto para efectos de la libertad provisional.

Amparo en revisión 594/2005. 1o. de junio de 2005. Mayoría de cuatro votos. Disidente: Olga Sánchez Cordero de García Villegas. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Enrique Luis Barraza Uribe.

LA EXIGENCIA DE GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO PARA GOZAR DE LA LIBERTAD PROVISIONAL EN EL PROCEDIMIENTO PENAL VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA.

En principio es importante señalar que el artículo 20 apartado B, fracción I, de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **establece el derecho de todo imputado a que se presuma su inocencia hasta en cuanto no se demuestre su responsabilidad mediante sentencia firme dictada por el juez de la causa**; de similar contenido es la fracción I del artículo 113, del Código Nacional de Procedimientos Penales que al referirse a los derechos del imputado dice: " El imputado tendrá los siguientes derechos: ...A ser considerado y tratado como inocente hasta que se demuestre su responsabilidad ". La Convención Americana Sobre Derechos Humanos suscrita por México desde el año de 1969, enuncia este principio de manera textual: " toda persona inculpada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se establezca legalmente su culpabilidad..", y qué decir de más de una decena de jurisprudencias que establecen el **in dubio pro reo**, y la presunción de inocencia en favor del acusado, que en materia fiscal no terminan por acatarse.

En el año de 2006 se derogó el artículo 94 del C.F.F., con lo que en la actualidad **ya no es prohibición la condena a la reparación del daño**, pero para que en la actualidad, un imputado por delito fiscal pueda gozar de su libertad cautelar, **LOS JUECES LA CONCEDERÁN SIEMPRE Y CUANDO SE CUMPLA CON LA SATISFACCIÓN DE LA CAUCIÓN Y QUEDE GARANTIZADA LA REPARACIÓN DEL DAÑO AL FISCO FEDERAL**, que incluye las contribuciones adeudadas, con actualización y recargos a la fecha en que se solicite la concesión de la libertad provisional (artículo 92 CFF).

Esta medida resulta contradictoria al cúmulo de principios y postulados sobre presunción de inocencia, ya que en realidad se está anticipando el resultado de la condena, lo cual de suyo es un acto ventajoso e injustificado jurídicamente.

El Primer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito mediante tesis del 27 de mayo de 2016 resolvió que:” la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena , y sobre esta base, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva debe ser justificada.” . Lo que se ilustra con la siguiente tesis:

PRISIÓN PREVENTIVA JUSTIFICADA. LA IMPOSICIÓN DE ESTA MEDIDA CAUTELAR BAJO EL ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO DELICTUOSO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO, ÉSTE PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y NO COMPARECER A JUICIO, **VIOLA EL PRINCIPIO DE PRESUNCIÓN DE INOCENCIA**, EN SU VERTIENTE DE REGLA DE TRATO PROCESAL (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).

El artículo 19, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos regula el **carácter excepcional de la medida cautelar de prisión preventiva**, ya que establece la posibilidad de que el Ministerio Público la solicite al Juez cuando otras medidas cautelares no sean suficientes para garantizar la comparecencia del imputado en el juicio, el desarrollo de la investigación, la protección de la víctima, de los testigos o de la comunidad, así como cuando el imputado esté siendo procesado o haya sido sentenciado previamente por la comisión de un delito doloso. Por su parte, el artículo 20, apartado B, fracción I, de la Constitución Federal reconoce el derecho fundamental de presunción de inocencia cuya vertiente de "regla de trato procesal", ha sido interpretada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 24/2014 (10a.), publicada en el Semanario Judicial de la Federación del viernes 4 de abril de 2014 a las 10:40 horas y en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 5, Tomo I, abril de 2014, página 497, de rubro:

"PRESUNCIÓN DE INOCENCIA COMO REGLA DE TRATO PROCESAL.", en el sentido de que toda persona sometida a un proceso penal debe ser tratada como inocente en tanto no se declare su culpabilidad por virtud de una sentencia condenatoria, lo que constriñe a los Jueces a impedir, en la mayor medida, la aplicación de disposiciones que impliquen una equiparación de hecho entre imputado y culpable, es decir, conlleva la prohibición de cualquier tipo de resolución judicial que suponga la anticipación de la pena. Sobre esta base, la imposición de la medida cautelar de prisión preventiva justificada, prevista en el artículo 194, apartado B, del Código de Procedimientos Penales para el Estado de México, BAJO EL ARGUMENTO DE QUE POR LA PENA DE PRISIÓN QUE MERECE EL HECHO DELICTUOSO QUE SE IMPUTA AL ACUSADO, ÉSTE PODRÍA SUSTRAERSE DE LA ACCIÓN DE LA JUSTICIA Y NO COMPARECER A JUICIO, POR NO TENER DERECHO A LA JUSTICIA RESTAURATIVA NI A QUE SE LE CONCEDA BENEFICIO O SUSTITUTIVO PENAL ALGUNO, viola el mencionado principio de presunción de inocencia, pues dicho pronunciamiento presupone de suyo la anticipación de la pena, lo cual constitucionalmente está proscrito en el actuar de los juzgadores, en atención a la vertiente regla de trato procesal.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO CON RESIDENCIA EN CIUDAD NEZAHUALCÓYOTL, ESTADO DE MÉXICO.

Amparo en revisión 491/2015. 18 de febrero de 2016. Unanimidad de votos, con voto concurrente del Magistrado Miguel Enrique Sánchez Frías. Ponente: Fernando Alberto Casasola Mendoza. Secretario: Fernando Emmanuelle Ortiz Sánchez.

Época: Décima Época Registro: 2011746 Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Tipo de Tesis: Aislada Fuente: Semanario Judicial de la Federación Publicación: viernes 27 de mayo de 2016 10:27 horas Materia(s): (Penal) Tesis: II.1o.33 P (10a.) .Esta tesis se publicó el viernes 27 de mayo de 2016 a las 10:27 horas en el Semanario Judicial de la Federación.

Son aplicables al análisis del principio de presunción de inocencia a que se refiere nuestra Constitución Política y el Código Nacional de Procedimientos Penales, entre otros ordenamientos, las jurisprudencias siguientes:

Al respecto cobra aplicación la siguiente jurisprudencia:

Época: Octava Época

Registro: 213021

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Tipo de Tesis: Jurisprudencia

Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación

Núm. 75, Marzo de 1994

Materia(s): Penal

Tesis: VII. P. J/37

Página: 63

IN DUBIO PRO REO

DUDA ABSOLUTORIA. ALCANCE DEL PRINCIPIO IN DUBIO PRO REO. El aforismo "in dubio pro reo" no tiene más alcance que el consistente en que en ausencia de prueba plena debe absolverse al acusado. TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEPTIMO CIRCUITO.

Amparo en revisión 135/93. Abel de Jesús Flores Machado. 10 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretario: Lucio Marín Rodríguez. Amparo directo 340/93. José Jiménez Islas. 19 de agosto de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Juana Martha López Quiroz. Amparo directo 331/93. Gilberto Sánchez Mendoza y otro. 7 de octubre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Mercedes Cabrera Pinzón. Amparo directo 531/93. Alfredo Cázares Calderón. 8 de diciembre de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Luis Alfonso Pérez y Pérez. Secretaria: Leticia López Vives. Amparo en revisión 415/93. César Ortega Ramírez. 13 de enero de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gilberto González Bozziere. Secretaria: Aída García Franco.

Época: Octava Época, Registro: 213021, Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito, Tipo de Tesis: Jurisprudencia, Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Núm. 75, Marzo de 1994, Materia(s): Penal, Tesis: VII. P. J/37. Página: 63

PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. ES APLICABLE RESPECTO DE LAS NORMAS RELATIVAS A LOS DERECHOS HUMANOS DE LOS QUE SEAN TITULARES LAS PERSONAS MORALES. El artículo 1º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al disponer que en los Estados Unidos Mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en dicha Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, no prevé distinción alguna, por lo que debe interpretarse en el sentido de que comprende tanto a las personas físicas, como a las morales, las que gozarán de aquellos derechos en la medida en que resulten conformes con su naturaleza y fines. **En consecuencia, el principio de interpretación más favorable a la persona, que como imperativo establece el párrafo segundo del citado precepto, es aplicable respecto de las normas relativas a los derechos humanos de los que gocen las personas morales, por lo que deberán interpretarse favoreciendo en todo tiempo la protección más amplia, a condición de que no se trate de aquellos derechos cuyo contenido material sólo pueda ser disfrutado por las personas físicas, lo que habrá de determinarse en cada caso concreto.**

La garantía de la reparación del daño en los delitos fiscales puede resultar difícil de cumplir por quien ha sido acusado penalmente; los juzgadores estiman que LA LIBERTAD PROVISIONAL BAJO LA APLICACIÓN DE MEDIDA CAUTELAR ESTARÁ CONCEDIDA SOLO QUE SERÁ NECESARIO GARANTIZAR LA REPARACIÓN DEL DAÑO; es decir el derecho de que el imputado goce de la medida cautelar para obtener su libertad en tanto se lleva a cabo su juzgamiento, no está en discusión, - solo que es un requisito que garantice el débito fiscal a entera satisfacción del fisco federal, esto es con actualización y recargos - así lo establece el Código Nacional de Procedimientos Penales: artículos 155 al 168 y 92 del C.F.F.

La exigencia del pago, viola el principio de inocencia, puesto que una razón de orden económico, resulta más poderosa que la juridicidad de la presunción de inocencia.

Una verdad queda para la reflexión; en aquellos casos en que los contribuyentes ya no tengan posibilidad económica para garantizar la reparación del daño, permanecerán en prisión preventiva, aunque en el dictado de la sentencia judicial puedan resultar absueltos.



defraudación fiscal equiparada

Se puede considerar igual o equivalente a algo cuando usamos la expresión “**equiparar**”, de ahí que en lo referente al delito fiscal que se comenta persistan los mismos elementos pero con determinadas particularidades que el legislador consideró tomar en cuenta por ser recurrentes de la conducta fraudulenta; <la falsedad > **en los asientos y registros contables es un ejemplo de esta agravante.**



análisis del artículo 109 del CFF.

Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:

- I. Consigne en las declaraciones que presente para los efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o valor de actos o actividades menores a los realmente obtenidos o realizados o determinados conforme a las leyes.

En la misma forma será sancionada aquella persona física que perciba ingresos acumulables, cuando realice en un ejercicio fiscal erogaciones superiores a los ingresos declarados en el propio ejercicio y no compruebe a la autoridad fiscal el origen de la discrepancia en los plazos y conforme al procedimiento establecido en la Ley del Impuesto sobre la Renta.

DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADO. REQUIERE PARA SU COMISIÓN DE UN AUTOR MATERIAL CALIFICADO. El tipo penal del delito de defraudación fiscal equiparado, previsto en el artículo 109, fracción I, del C.F.F., sólo **puede ser cometido directamente por sujetos activos calificados, que son quienes tienen la obligación de presentar las declaraciones fiscales** (contribuyentes). En el caso de las personas morales, la obligación recae en sus representantes legales, por lo que si el comisario de una empresa carece de ese carácter, no puede ser autor material del delito de que se trata.

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Febrero de 2003

Página: 1043

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 225/2002. 3 de octubre de 2002. Unanimidad de votos. Ponente: Ana Victoria Cárdenas Muñoz, secretaria de tribunal autorizada por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretaria: Luz María Arizaga Cortés.

Como vemos la tesis aislada anterior es incisiva de manera directa sobre el representante legal de la persona moral por ser el obligado a presentar las declaraciones fiscales; posteriormente se resolvió en jurisprudencia de la Primera Sala del alto tribunal, un razonamiento con mayor amplitud al emanado del Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito:

DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL C.F.F. LA CONFIGURACIÓN DE ESTE DELITO NO REQUIERE DE SUJETO ACTIVO CALIFICADO. El citado artículo prevé el delito de defraudación fiscal equiparada, el cual consiste, entre otras hipótesis, en consignar en las declaraciones presentadas para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a la ley, **SIN EXIGIR QUE EL SUJETO ACTIVO TENGA UNA CALIDAD ESPECÍFICA.** En ese sentido, se concluye que la configuración del mencionado ilícito no requiere de sujeto activo calificado, pues basta que materialmente se consignen en las declaraciones fiscales presentadas deducciones falsas o ingresos menores a los realmente percibidos; de ahí que **TRATÁNDOSE DE DECLARACIONES PRESENTADAS A NOMBRE Y POR CUENTA DE PERSONAS MORALES, COMETE EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA QUIEN DESPLIEGUE LA CONDUCTA SEÑALADA, INDEPENDIENTEMENTE DE QUE TENGA O NO ALGÚN PODER O FACULTAD POR PARTE DE LA EMPRESA.**

Contradicción de tesis 53/2006-PS. Entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Tercer Circuito y el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Octavo Circuito. 8 de noviembre de 2006. Cinco votos. Ponente: Sergio A. Valls Hernández. Secretario: Arnoldo Castellanos Morfín.

Tesis de jurisprudencia 95/2006. Aprobada por la Primera Sala de este Alto Tribunal, en sesión de fecha ocho de noviembre de dos mil seis. Tipo de documento: Jurisprudencia
Novena época

Instancia: Primera Sala

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XXV, Febrero de 2007

Página: 264

Se ha considerado que el delito de defraudación fiscal equiparada previsto en la fracción I del artículo 109 del C.F.F., es un ilícito de “**mera conducta**”, < Quien consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes.>, que su configuración no requiere de un “resultado” como sucede en las hipótesis del artículo 108 del CFF; así lo resolvió en tesis aislada el Sexto Tribunal Colegiado en Materia Pernal del Primer Circuito.

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Abril de 2003

Página: 1074

DEFRAUDACIÓN FISCAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL C.F.F., DERIVADO DE SU NATURALEZA JURÍDICA SE DESPRENDE QUE ES UN ILÍCITO DE MERA CONDUCTA. Los delitos de mera conducta son los que **describen como punible el simple comportamiento del agente y, por ello, el legislador ha considerado que la conducta por sí misma, dada su potencialidad criminosa, debe ser objeto de represión penal, independientemente del resultado que pueda producir;** en cambio, los delitos de resultado se caracterizan porque la sola conducta no es suficiente para su incriminación, sino que se hace necesaria **la producción de un evento dado, de tal manera que si éste no se realiza, el hecho carece de TIPICIDAD plena.** De esta forma, el delito de defraudación fiscal previsto en la fracción I del artículo 109 del C.F.F., que dice: "Artículo 109. Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: I. Consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes. ...", se trata de un ilícito que en atención a su contenido o forma de integración fáctica, **es de los llamados de mera conducta,** es decir, no exige la producción de un resultado material, pues tiene su consumación cuando se **consignan en las declaraciones** (que se presentan para efectos fiscales) deducciones falsas o ingresos menores a los obtenidos o determinados conforme a las leyes, por lo que la conducta descrita, por sí sola, es suficiente para acreditar el cuerpo del delito, pues se trata de un delito unisubsistente, es decir, configurado por un solo acto, en este supuesto consistente en consignar deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos, o a los determinados conforme a las leyes, sin que lo anterior implique que la conducta no genere un resultado que pudiere causar un perjuicio al fisco federal; sin embargo, ello no es un elemento integrador del cuerpo del delito.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1246/2002. 21 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gloria Rangel del Valle, secretaria de tribunal autorizada en términos del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Felipe Gilberto Vázquez Pedraza.

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVIII, Julio de 2003

Página: 1081

Con cierta similitud a lo razonado por el Tribunal Colegiado de Circuito en la tesis anterior, y haciendo énfasis en el núcleo principal de ambos delitos previstos en los diversos 108 y 109 del CFF, se pronunció la siguiente:

DEFRAUDACIÓN FISCAL PREVISTA POR EL ARTÍCULO 108 DEL C.F.F. EXCLUYE A LA FIGURA EQUIPARADA CONTEMPLADA POR EL DIVERSO NUMERAL 109, FRACCIÓN I, DEL MISMO ORDENAMIENTO, AL ACREDITARSE QUE EL INFRACTOR, MEDIANTE EL ENGAÑO AL PRESENTAR LA DECLARACIÓN, OMITIÓ EL PAGO DE IMPUESTOS. Del texto de los artículos 108 y 109, fracción I, del C.F.F., se desprende que el **primero describe el tipo del delito de defraudación fiscal mediante una conducta que, con el uso de engaño o aprovechamiento del error omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal**, mientras que el segundo alude a una figura equiparada que sanciona a quien consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos, de lo que se sigue que **SI EL INFRACTOR, MEDIANTE EL ENGAÑO AL PRESENTAR LA DECLARACIÓN DEL EJERCICIO ANUAL OMITE EL PAGO DE CIERTOS** impuestos, su conducta encuadra en la hipótesis delictiva principal contenida en el invocado artículo 108, con exclusión de la figura subsidiaria descrita por el aludido numeral 109, parte inicial de la fracción I, en virtud de que si bien ambas entidades delictivas coinciden en el objeto a salvaguardar, como lo es el patrimonio del Estado, así como en los sujetos calificados, sin embargo, pierden su similitud en los **ELEMENTOS COMISIVOS Y EN EL NÚCLEO DEL TIPO**, puesto que en el primero lo son el uso de engaño o el aprovechamiento del error, además de que el núcleo principal del tipo lo constituye la omisión total o parcial del pago de alguna contribución o la obtención de un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

En cambio, el segundo de los injustos **carece de medios comisivos y el núcleo del tipo penal es distinto**, pues se limita a la consignación de declaraciones fiscales con deducciones falsas o ingresos menores a los realmente obtenidos o determinados por la ley, lo que significa que subsidiariamente **sólo sanciona determinada conducta** que constituye un estadio de la figura principal, la que ocurre antes del núcleo del tipo, esto es, previo a la omisión o la obtención señaladas, de tal suerte que si el proceder que se atribuye al activo no se constriñe a la presentación de una declaración en la que reporta ingresos menores a los que percibió, sino que mediante ella logra omitir el pago parcial o total de contribuciones con perjuicios para el erario federal, debe estimarse que en ese supuesto la figura subsidiaria queda absorbida por la principal, porque la conducta del infractor colmó todos los elementos de esta última.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo directo 171/2002. 9 de julio de 2002. Mayoría de votos. Disidente: Hugo Ricardo Ramos Carreón. Ponente: Jorge Humberto Benítez Pimienta. Secretario: Osiris Ramón Cedeño Muñoz.

Nota: Sobre el tema tratado existe denuncia de contradicción de tesis 103/2002, pendiente de resolver en la Primera Sala.

El CFF no determina lo que debe entenderse por deducciones falsas, por lo cual, para evitar la incertidumbre jurídica y con base en la definición expresada, por éstas debe estimarse que serán única y exclusivamente aquellas que se refieren a operaciones inexistentes o simuladas y que pretendan ampararse con documentos falsos o con documentos expedidos por personas físicas o morales, cuya existencia no pueda demostrarse fehacientemente. Por demás interesante es el contenido de la tesis aislada que veremos a continuación porque aborda una de las hipótesis más importantes del ilícito.

DEFRAUDACIÓN FISCAL PREVISTA EN LA FRACCIÓN I DEL ARTÍCULO 109 DEL C.F.F. LA MENCIÓN EN LA DECLARACIÓN FISCAL DE HABER ENTERADO PAGOS PROVISIONALES NO EFECTUADOS, NO DEBE SER CONSIDERADA COMO DEDUCCIÓN FALSA PARA INTEGRAR EL DELITO. La fracción I del artículo 109 del C.F.F., prevé el supuesto de defraudación fiscal, consistente en **consignar en las declaraciones** que se presenten para efectos fiscales, deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes; en esta hipótesis, debe considerarse que las deducciones son las partidas que la ley fiscal permite se resten al ingreso acumulable, para que se integre la base gravable sobre la cual se va a enterar el impuesto. **Ahora bien, el Código Fiscal no determina lo que debe entenderse por deducciones falsas**, por lo cual, para evitar la incertidumbre jurídica y con base en la definición expresada, por éstas debe estimarse que serán única y exclusivamente aquellas **que se refieren a operaciones inexistentes o simuladas y que pretendan ampararse con documentos falsos o con documentos expedidos por personas físicas o morales, cuya existencia no pueda demostrarse fehacientemente**. En este sentido, la sanción **PENAL SÓLO SE APLICARÁ A QUIENES EFECTIVA Y DELIBERADAMENTE LLEVEN A CABO MAQUINACIONES** o artificios con ánimo de dolo y con el único objeto de eludir o disminuir las cargas tributarias que legalmente les correspondan, ya que de no ser así, al igual que en el caso de los (...)

(...) ingresos omitidos, cualquier deducción, **ASÍ DERIVE DE MEROS PROBLEMAS INTERPRETATIVOS DE LA LEY APLICABLE, QUE SEA RECHAZADA POR LAS AUTORIDADES FISCALES, CORRE EL RIESGO DE SER CALIFICADA DE "FALSA" Y QUE EL CONTRIBUYENTE PUEDA SER ACUSADO DE LA COMISIÓN DE UN DELITO FISCAL.** Atendiendo a lo antes expuesto debe estimarse que en el supuesto de que el contribuyente en su declaración fiscal mencione haber enterado pagos provisionales, cuando en realidad no los efectuó, esta conducta no puede considerarse que configure el delito en cuestión, toda vez que estos pagos, lejos de ser una cantidad que disminuya la base gravable, la conforman en su monto con inclusión de esos pagos, dado que realmente constituye el impuesto que se ha pagado parcialmente, pagos provisionales que en atención a su naturaleza constituyen propiamente contribuciones; sin embargo, lo antes descrito puede configurar un delito diverso previsto en el código en comento.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 1246/2002. 21 de enero de 2003. Unanimidad de votos. Ponente: Gloria Rangel del Valle, secretaria de tribunal autorizada en términos del artículo 36 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación para desempeñar las funciones de Magistrada. Secretario: Felipe Gilberto Vázquez Pedraza.

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XVII, Abril de 2003

Página: 1075

DEFRAUDACIÓN FISCAL. SE ACTUALIZA ESTE DELITO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108, PÁRRAFO PRIMERO, DEL C.F.F. , VIGENTE EN 2002, Y NO EL QUE PREVÉ EL DIVERSO ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I, DE DICHO ORDENAMIENTO LEGAL, CUANDO EL CONTRIBUYENTE AL PRESENTAR LA DECLARACIÓN ANUAL POR CORRECCIÓN ACREDITÓ UN SALDO A FAVOR QUE NO LE CORRESPONDÍA. El artículo 109, fracción I, del C.F.F., vigente en el año dos mil dos, establecía que será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien consigne en las declaraciones que presente para efectos fiscales deducciones falsas o ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados conforme a las leyes; mientras que el diverso artículo 108, primer párrafo, disponía que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores omite total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal; por lo que si en el caso, la conducta atribuida al indiciado consiste en que en representación de la empresa contribuyente presentó una declaración anual por corrección, en la que acreditó un saldo a favor que no le correspondía a ésta, **con lo cual omitió totalmente el pago del impuesto al valor agregado y obtuvo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal;**

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XXI, Marzo de 2005

Página: 1107

SU CONDUCTA SE UBICA EN LA HIPÓTESIS PREVISTA EN EL CITADO ARTÍCULO 108 y no en la establecida en el diverso artículo 109, fracción I, pues aun cuando los hechos que se le atribuyen derivan de la presentación de una declaración de impuestos conforme lo exige este último precepto, no se acredita la existencia de los diversos elementos que se exigen, ya que los hechos no encuadran en la figura de una deducción falsa, menos aún en la de haber declarado ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos o determinados, si se tiene en cuenta que las deducciones son aquellas partidas que la ley permite restar de los ingresos acumulables del contribuyente, para así conformar la base gravable sobre la cual el impuesto se paga, esto es, son los conceptos que el legislador considera intervienen en detrimento de la riqueza objeto del ingreso obtenido por el contribuyente, las cuales deben cumplir con determinadas formalidades, mientras que los ingresos acumulables, como su nombre lo indica, se obtienen de la suma de la totalidad de los ingresos acumulables del contribuyente.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL TERCER CIRCUITO.

Amparo en revisión 133/2004. 31 de agosto de 2004. Unanimidad de votos. Ponente: Martín Ángel Rubio Padilla. Secretaria: María del Rosario Parada Ruiz.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XVIII, agosto de 2003, página 83, tesis 1a./J. 38/2003, de rubro: "FRAUDE FISCAL GENÉRICO PREVISTO EN EL ARTÍCULO 108 DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN. NO PROCEDE LA SUBSUNCIÓN EN ÉL, DEL EQUIPARADO CONTENIDO EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I, DEL PROPIO CÓDIGO."

II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado.

DEFRAUDACION FISCAL, DELITO DE. LA CORRECCION AUTORIZADA POR EL CODIGO TRIBUTARIO NO EXIME DE RESPONSABILIDAD AL INFRACTOR. Aun cuando el artículo 58 del C.F.F., autoriza al contribuyente a corregir su situación fiscal, mediante la presentación de una **forma de corrección y no obstante que se hubieran pagado los impuestos omitidos, ello resulta independiente de la responsabilidad penal en que se incurra**, puesto que la corrección entraña una garantía para regularizar la situación fiscal, con independencia de la situación penal que pudiera fincarse al haber sido descubierta ésta, según se desprende de los artículos 70 y 94 del propio ordenamiento legal en cita.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 318/93. Luis Pérez Aguilar. 9 de junio de 1993. Unanimidad

Tipo de documento: Tesis aislada

Octava época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XII, Agosto de 1993

Página: 404

**UN PROBLEMA DE REDACCIÓN GRAMATICAL GRAVE EN EL DELITO DE
DEFRAUDACIÓN FISCAL CALIFICADA, RESPECTO DE LA OMISIÓN DE ENTERAR A
LAS AUTORIDADES FISCALES, LAS CONTRIBUCIONES RETENIDAS O RECAUDADAS
POR LOS CONTRIBUYENTES.**

El artículo 109, fracción II, del C.F.F., establece:

"Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien:

II. Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado."

Por su parte, el artículo 108, sexto párrafo, inciso e), del propio ordenamiento dispone:

"El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código, serán calificados cuando se originen por:

e) Omitir contribuciones retenidas recaudadas o trasladadas .".

En este segundo numeral - artículo 108 inciso e) -, encontramos el verbo " **omitir** " sin complemento, < omitir...qué >, (enterar) las contribuciones, pero no lo dice. **Así que el enunciado y sus consecuencias resultan inseguras para cimentar una acción de carácter penal por defraudación fiscal calificada**, originada por la **OMISIÓN DE ENTERAR** a las autoridades fiscales, las contribuciones retenidas, recaudadas o trasladadas a los contribuyentes; no obstante, en auxilio de su deficiente redacción, el Sexto Tribunal Colegiado en materia penal del Primer Circuito, acudió en auxilio, estableciendo una interpretación gramatical para dar complemento al verbo " omitir " y emitió la tesis aislada que enseguida presento:

Tipo de documento: Tesis aislada
Novena época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXII, Septiembre de 2005

Página: 1446

DEFRAUDACIÓN FISCAL. LA MODIFICATIVA DEL DELITO PREVISTA EN EL ARTÍCULO 108, SEXTO PÁRRAFO, INCISO E), EN RELACIÓN CON EL NUMERAL 109, FRACCIÓN II, AMBOS DEL C.F.F. DEBE INTERPRETARSE DE MANERA TELEOLÓGICA, ARMÓNICA Y SISTEMÁTICA. El artículo 109, fracción II, del C.F.F., establece: "Será sancionado con las mismas penas del delito de defraudación fiscal, quien: ... **II. Omita enterar a las autoridades fiscales**, dentro del plazo que la ley establezca, las cantidades que por concepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado.". Por su parte, el artículo 108, sexto párrafo, inciso e), del propio ordenamiento dispone: "El delito de defraudación fiscal y los previstos en el artículo 109 de este código, serán calificados cuando se originen por: ... **e) Omitir contribuciones retenidas o recaudadas.**". De la simple lectura de la circunstancia modificativa del tipo penal se advierte que ésta se **ORIGINA POR OMITIR CONTRIBUCIONES RETENIDAS O RECAUDADAS**, mientras que el **tipo penal se actualiza por haber retenido o recaudado contribuciones y no enterarlas al fisco** federal dentro de los plazos de ley. De lo anterior se aprecia, que la redacción del inciso e) del artículo 108 del código en cita, desde un punto de vista gramatical, no es del todo correcta por el uso indebido, en un primer plano, del verbo "omitir", sin estar complementado para que cobre función lingüística. **Sin embargo, tratándose de una norma que complementa a otra, no puede examinarse una prescindiendo de la otra, tampoco puede soslayarse el contexto normativo al que pertenecen y desde luego, al espíritu del legislador al crear la circunstancia modificativa.**

ASÍ, LA INTERPRETACIÓN GRAMATICAL SE VE SUPERADA POR LA SISTEMÁTICA, ARMÓNICA Y TELEOLÓGICA que tiene en consideración la configuración del tipo penal, la inclusión de la modificativa para los delitos previstos en los artículos 108 y 109 del C.F.F., y los documentos del proceso legislativo que le dieron origen, de los que se desprende que se estableció este nuevo supuesto de calificación del delito de defraudación fiscal y conductas que se le asimilan, cuando los contribuyentes realicen la conducta delictiva respecto de contribuciones retenidas o recaudadas, ya que ello, por sí solo, **REVELA LA INTENCIÓN DOLOSA DEL SUJETO ACTIVO** y debe ser más reprochable, pues lesiona gravemente al fisco federal. En este sentido, el legislador tomó en consideración una situación específica que rodea a la realización del hecho y que supone especiales condiciones del autor, que deben determinar la modulación de la pena aplicable, **por la apreciación de la gravedad del hecho y la culpabilidad del autor**; así, **atendiendo a una graduación de determinados elementos del delito y al principio de proporcionalidad de las penas respecto del marco genérico, tomó en consideración elementos objetivos y subjetivos que modulan el injusto y la culpabilidad**. Por lo anterior, debe considerarse, por una parte, que la circunstancia modificativa al tomar en cuenta la naturaleza de la contribución, va dirigida al objeto mismo sobre el que recae la acción u omisión de que trate el tipo penal y, por otra la calificativa se actualiza en cualquiera de las conductas delictivas previstas en los preceptos mencionados y cobrará **aplicación, siempre y cuando la acción u omisión recaiga en contribuciones retenidas o recaudadas**.

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2146/2004. 30 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretaria: Sonia Hernández Orozco.

III. Se beneficie sin derecho de un subsidio o estímulo fiscal.

DEFRAUDACION FISCAL, DELITO DE. LA CORRECCION AUTORIZADA POR EL CODIGO TRIBUTARIO NO EXIME DE RESPONSABILIDAD AL INFRACTOR. Aun cuando el artículo 58 del C.F.F., autoriza al contribuyente a corregir su situación fiscal, mediante la presentación de una forma de corrección y no obstante que se hubieran pagado los impuestos omitidos, **ello resulta independiente de la responsabilidad penal en que se incurra, puesto que la corrección entraña una garantía para regularizar la situación fiscal, con independencia de la situación penal que pudiera fincarse al haber sido descubierta ésta,** según se desprende de los artículos 70 y 94 del propio ordenamiento legal en cita.

TERCER TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 318/93. Luis Pérez Aguilar. 9 de junio de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: José Angel Mandujano Gordillo. Secretaria: Julieta María Elena Carrasco.

Tipo de documento: Tesis aislada

Octava época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XII, Agosto de 1993

Página: 404

IV. Simule uno o más actos o contratos obteniendo un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

DEFRAUDACIÓN FISCAL, LA CONDUCTA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 109 FRACCIÓN IV, DEL C.F.F., SE SUBSUME EN LA PREVISTA POR EL ARTÍCULO 108 DEL MISMO ORDENAMIENTO. De la lectura de los artículos 108 y 109 fracción IV, del C.F.F., se advierte que el primero describe el delito de defraudación fiscal como la **omisión total o parcial del pago de contribuciones para obtener un beneficio indebido, en perjuicio del fisco federal, UTILIZANDO EL ENGAÑO O APROVECHANDO EL ERROR DEL PASIVO**, y en el segundo de los preceptos aludidos se contempla como tipo equiparado a la defraudación fiscal **LA EJECUCIÓN DE DOS O MÁS ACTOS RELACIONADOS ENTRE SÍ**, con el único propósito de obtener un beneficio indebido en perjuicio del fisco. Luego, si el activo empleando maniobras engañosas en dos declaraciones fiscales obtuvo un beneficio indebido en perjuicio de la hacienda pública, es claro, que se actualizó la hipótesis contenida en el citado artículo 108, y la repetición de dichas conductas engañosas quedan subsumidas en él, y no de manera autónoma en la fracción IV del artículo 109 del C.F.F. pues de lo contrario se recalificaría el proceder engañoso.

TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SÉPTIMO CIRCUITO.

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: IX, Mayo de 1999

Página: 1003

V. Sea responsable por omitir presentar, por más de doce meses, las declaraciones que tengan carácter de definitivas, así como las de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente.

Respecto de esta fracción V, cabe comentar que por reforma al precepto se estableció cuál es el **TIPO DE DECLARACIONES A QUE SE REFIERE EL TIPO PENAL, - LAS QUE TENGAN CARÁCTER DE DEFINITIVAS** -, ya que se presentaba la redacción imprecisa, ambigua y abierta ya que el precepto mencionaba " a quien omita presentar, por más de doce meses, la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente ", y una vez más el Poder Judicial acudió en auxilio:

Tipo de documento: Tesis aislada
Novena época
Instancia: Primera Sala
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXVI, Octubre de 2007
Página: 187

DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN V, DEL C.F.F., QUE PREVÉ ESE DELITO, NO VIOLA LA GARANTÍA DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL. Conforme a dicha garantía, contenida en el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que un hecho sea considerado como delito debe estar descrito expresamente como tal en una ley en la que se establezca la pena a la que se hace acreedor quien lo ejecuta dentro de los supuestos establecidos en el ordenamiento **RESPECTIVO, EL CUAL DEBE CONFORMARSE POR ELEMENTOS, CARACTERÍSTICAS O REFERENCIAS CLAROS, PRECISOS Y EXACTOS, ES DECIR, LA MENCIONADA GARANTÍA CONSTITUCIONAL ATIENDE A LA INTEGRACIÓN DE LA NORMA PUNITIVA, CONCRETAMENTE EN CUANTO A SU DESCRIPCIÓN TÍPICA, LA PREVISIÓN DE SU PENA Y SU APLICACIÓN.** En congruencia con lo anterior, se concluye que el artículo 109, fracción V, del C.F.F., digo Fiscal de la Federación, al disponer que se sancionará con las mismas penas del delito de defraudación fiscal a quien omita presentar, por más de doce meses, la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales, dejando de pagar la contribución correspondiente, no viola la garantía de exacta aplicación de la ley penal, ya que no se trata de un tipo abierto, pues detalla claramente la conducta considerada ilícita y, por tanto, el destinatario de la norma puede saber con **precisión qué es lo que está prohibido**; de ahí que no existe aplicación analógica de la norma y ésta cumple con las exigencias constitucionales, pues no tiene que recurrirse a otros ordenamientos para definir al hecho como delictivo, sino que en la descripción legal se encuentra la esencia de lo que pretende evitarse. Así, como toda disposición normativa que instituye una omisión como tipo penal, en su configuración subyace la existencia de una norma preceptiva que impele al sujeto activo a actuar en determinado sentido, en el caso, a que el contribuyente presente la declaración de un ejercicio fiscal que exijan las leyes fiscales correspondientes, sin exceder doce meses, y pagar la contribución respectiva.

DEFRAUDACION FISCAL EQUIPARADA. NO SE ACREDITAN SUS ELEMENTOS CUANDO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLUCION LA REVISION DEL CREDITO FISCAL. Los elementos típicos del delito de defraudación fiscal equiparada previsto en el artículo 109, fracción V, del C.F.F., son: a) Que se omita presentar por más de seis meses la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales; y b) Que por esta omisión se deje de pagar la contribución correspondiente. Ahora bien, de la descripción anotada se desprende que para que se colme a cabalidad el segundo de dichos supuestos, es menester demostrar en forma fehaciente que **el contribuyente realmente tiene la obligación fiscal que se le reclama**, pero tal elemento no se actualiza cuando **impugna oportunamente la resolución que determinó el crédito fiscal por el ejercicio revisado** y, al formularse la querella respectiva, la reclamación se encuentra pendiente de resolver, pues en tal supuesto, ante el desconocimiento de la existencia de la obligación tributaria del reo, no puede determinarse si el segundo de los elementos indicados se encuentra acreditado o no.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DECIMO CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 412/96. Roberto Borge Martín. 10 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Aldama Vega. Secretario: Gabriel A. Ayala Quiñones.

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: IV, Diciembre de 1996

Página: 385

VI. (Se deroga)

VII. (Se deroga)

No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores, entera espontáneamente, con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido antes de que la autoridad fiscal descubra la omisión o el perjuicio, o medie requerimiento, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Tipo de documento: Tesis aislada
Novena época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXII, Septiembre de 2005
Página: 1445

DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. NO SE ACTUALIZA LA EXCEPCIÓN PREVISTA EN LA PARTE FINAL DEL ARTÍCULO 109 DEL C.F.F., SI EL **CONTRIBUYENTE INFORMA A LA AUTORIDAD FISCAL LA OMISIÓN DEL PAGO DE CONTRIBUCIONES, INCLUSO INDETERMINADAS**, Y PROPONE CUBRIRLAS MEDIANTE DACIÓN EN PAGO, PERO ANTES DE REALIZARLO, DICHA AUTORIDAD EMITE Y LE NOTIFICA UNA ORDEN DE VISITA CON MOTIVO DE TAL INFORMACIÓN. El artículo 109, último párrafo, del C.F.F., establece: "No se formulará querella, si quien encontrándose en los supuestos anteriores, entera espontáneamente, con sus recargos, el monto de la contribución omitida o del beneficio indebido **ANTES DE QUE LA AUTORIDAD FISCAL DESCUBRA SU OMISIÓN O EL PERJUICIO, O MEDIE REQUERIMIENTO**, orden de visita o cualquier otra gestión notificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.". De dicho precepto se desprende que para que no se formule querella por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en alguno de los supuestos delictivos descritos en el propio numeral, **se requiere del pago espontáneo de la contribución omitida con sus recargos o del beneficio indebido**, antes de que se actualice alguno de los siguientes supuestos: a) que la autoridad fiscal descubra la omisión o perjuicio; b) que medie requerimiento; c) que medie orden de visita o; d) que medie cualquier gestión notificada por la autoridad fiscal, cuya finalidad sea la comprobación del cumplimiento de las disposiciones fiscales.

Así, el entero espontáneo implica el pago de la contribución y sus recargos, por lo que la circunstancia de que el contribuyente informe o comunique a la autoridad fiscal la omisión del pago de contribuciones, incluso, **indeterminadas y le proponga cubrirlas mediante dación en pago, no equivale al pago espontáneo de la contribución específica de que se trate con sus recargos.** En este sentido, si con motivo de dicha información la autoridad fiscal inicia sus facultades fiscalizadoras emitiendo y notificando una orden de visita y después de ello el contribuyente realiza el pago de la contribución y sus recargos, no puede considerarse que se actualice la excepción prevista **en la parte final del artículo 109 del C.F.F., pues existió y se notificó, antes del pago, una orden de visita con la finalidad de comprobar el cumplimiento de las obligaciones tributarias y, en su caso, lograr el entero de las contribuciones y sus recargos.**

SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 2146/2004. 30 de junio de 2005. Unanimidad de votos. Ponente: Roberto Lara Hernández. Secretaria: Sonia Hernández Orozco.

si una sentencia de nulidad pronunciada por el órgano competente es suficiente para impedir se continúe con la causa penal en el delito de defraudación fiscal o su equiparable. La interrogante que aborda la tesis aislada siguiente:

DEFRAUDACION FISCAL. NULIDAD DE LA RESOLUCION QUE DETERMINA EL CREDITO FISCAL, INSUFICIENTE PARA DESVANECER LOS DATOS EN LA CAUSA PENAL INSTRUIDA EN CONTRA DEL QUEJOSO POR EL DELITO DE. El hecho de que una Sala Regional del Tribunal Fiscal de la Federación, **declare la nulidad del crédito fiscal determinado a cargo de una persona moral, es insuficiente para que el juez que conoce de la causa penal que se sigue en contra de su representante legal, por el delito de defraudación fiscal** previsto y sancionado por el artículo 108 del C.F.F., declare probado el incidente de desvanecimiento de datos, promovido por el inculpado con apoyo únicamente en aquella resolución; máxime si la nulidad se hizo depender de una violación formal, pues ello implica que la reposición del procedimiento de comprobación fiscal ordenada, **ES SÓLO PARA DETERMINADOS EFECTOS**; y sobre todo si el auto de formal prisión dictado en contra del quejoso, se apoyó en diversos datos que demuestran la ...

conducta delictiva de referencia. Asimismo, porque la citada disposición no establece como elemento del delito de defraudación fiscal, la existencia de una determinación del crédito fiscal en cantidad líquida, sino que señala que comete el delito de defraudación fiscal quien con uso de engaños o aprovechamientos de errores, omita total o parcialmente el pago de alguna contribución u obtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 461/94. Jorge Galdino Niño de Rivera Velázquez. 22 de noviembre de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro Castillo.

Nota: Por ejecutoria de fecha 13 de junio de 2000, el Tribunal Pleno declaró inexistente la contradicción de tesis 20/98 en que había participado el presente criterio.

Tipo de documento: Tesis aislada

Octava época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación

Tomo: XV, Febrero de 1995

Página: 147

INFORMACIÓN PROPORCIONADA POR UN TERCERO A LOS VISITADORES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO. ES VALIDO BASARSE EN ELLA, PARA DICTAR UN AUTO DE FORMAL PRISIÓN POR EL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 180 del Código Federal de Procedimientos Penales, **para la comprobación de los elementos del tipo penal y la probable responsabilidad del inculpado, el Ministerio Público y los tribunales gozan de la acción más amplia para emplear los medios de investigación** que estimen conducentes aunque no se mencionen en la ley, siempre y cuando dichos medios no sean contrarios a derecho, por lo que si en el auto de formal prisión el Juez responsable se basó en la información dada por un tercero a través de documentos **proporcionados a los visitantes de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público**, dichas pruebas sí son aptas para acreditar el tipo penal de defraudación fiscal.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO.

Amparo en revisión 332/95. Antonio Rosette López. 10 de enero de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: María Eugenia Estela Martínez Cardiel. Secretario: Enrique Baigts Muñoz.

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: III, Marzo de 1996

Página: 954

Deberá tomarse en cuenta que el contenido de las actas parciales si pueden servir para acreditar el delito de defraudación fiscal, por ello es importante refutarlas en la ultima acta parcial con documentacion y peritajes. Tomado en consideracion que los visitadores no esta facultados para valor la documentacion. Lo cula se ilustra en la siguiente tesis:

VISITA DOMICILIARIA. LOS DOCUMENTOS, LIBROS O REGISTROS, QUE COMO PRUEBA EXHIBA EL CONTRIBUYENTE PARA DESVIRTUAR IRREGULARIDADES, NO PUEDEN SER VALORADOS POR LOS VISITADORES, PUES SÓLO LES COMPETE DETALLARLOS Y HACER CONSTAR HECHOS U OMISIONES EN LAS ACTAS CIRCUNSTANCIADAS.

El artículo 46 del C.F.F., no establece, como facultad de los visitantes, valorar las pruebas que el contribuyente ofrezca durante la práctica de una visita domiciliaria con la finalidad de desvirtuar irregularidades detectadas en la última acta parcial, pues sólo les compete hacer constar su exhibición, levantando el acta circunstanciada donde se asiente la existencia de los documentos aportados por el contribuyente, ya que como auxiliares de las autoridades fiscales sólo están facultados para asentar los hechos u omisiones que observen durante la visita, pero dentro de sus atribuciones no se encuentra la de determinar créditos fiscales, a través de la valoración de los documentos, libros o registros que como prueba exhiba el particular.

Contradicción de tesis 268/2014. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Tercero en Materia Administrativa del Segundo Circuito y Primero del Décimo Cuarto Circuito, actual Tribunal Colegiado en Materias Civil y Administrativa del Décimo Cuarto Circuito. 12 de noviembre de 2014. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, José Fernando Franco González Salas, Margarita Beatriz Luna Ramos y Luis María Aguilar Morales. Ausente: Sergio A. Valls Hernández. Ponente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Secretaria: Claudia Mendoza Polanco (**énfasis añadido**)". Registro: 2008656
Instancia: Segunda Sala
Tipo de Tesis: Jurisprudencia
Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación
Libro 16, Marzo de 2015, Tomo II
Materia(s): Administrativa
Tesis: 2a./J. 1/2015 (10a.)
Página: 1503

DEFRAUDACIÓN FISCAL. PARA QUE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO FORMULE QUERRELLA POR ESE DELITO, NO ES NECESARIO QUE ANTES BRINDE AL VISITADO LA OPORTUNIDAD DE DEFENDERSE. Si bien es cierto que conforme a lo dispuesto en el artículo 92, fracción I, del C.F.F., vigente en mil novecientos noventa y cinco, para proceder penalmente por la posible comisión de un delito fiscal, es necesario que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público formule querrella, tratándose, entre otros, de los hechos que implican la probable comisión del delito de defraudación fiscal, también lo es que si durante la práctica de una visita de inspección, la citada dependencia tiene conocimiento de hechos que pueden configurar esa conducta delictiva, aquélla podrá presentar la querrella respectiva sin necesidad de escuchar previamente al visitado, pues si en términos de lo previsto en el artículo 21 constitucional compete al Ministerio Público Federal la persecución de los delitos, y a la autoridad judicial, su sanción mediante la imposición de las penas, resulta inconcuso que la autoridad hacendaria no tiene el deber de brindar al particular, antes de la formulación de la querrella, la posibilidad de desplegar su defensa, ofreciendo pruebas que desvirtúen los hechos en que se funde, pues ante ella no se resolverá sobre la existencia o no del ilícito.

Contradicción de tesis 10/98. Entre las sustentadas por el Tercer y Cuarto Tribunales Colegiados en Materia Penal del Primer Circuito. 13 de junio de 2000. Mayoría de diez votos. Disidente: Sergio Salvador Aguirre Anguiano. Ponente: José de Jesús Gudiño Pelayo. Secretaria: Guadalupe M. Ortiz Blanco.
No. Registro: 190,716
Jurisprudencia
Materia(s): Penal
Novena Época
Instancia: Pleno
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
XII, Diciembre de 2000
Tesis: P./J. 130/2000
Página: 10

DELITOS FISCALES. EL ARTÍCULO 111, FRACCIÓN III, DEL C.F.F., NO VIOLA EL DERECHO DE EXACTA APLICACIÓN DE LA LEY PENAL

Conforme al derecho de exacta aplicación de la ley penal, previsto en el tercer párrafo del artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, no existe pena ni delito sin ley que los establezca; lo anterior implica que al prever las penas, la autoridad legislativa no puede sustraerse del deber de describir las conductas señaladas como merecedoras de sanción penal, incluyendo todos sus elementos, características, condiciones, términos y plazos, pues ello es necesario para evitar confusiones en su aplicación o demeritar la defensa del procesado. En ese sentido, el artículo 111, fracción III, del C.F.F., al señalar que se impondrá sanción de tres meses a tres años de prisión, a quien oculte, altere o destruya total o parcialmente los sistemas y registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar, no viola el citado derecho constitucional, pues existe claridad en la descripción de todos los elementos que configuran al delito y, por tanto, el destinatario de la norma puede saber con precisión lo que está prohibido. En efecto, el elemento que integra el tipo penal relativo a quien oculte total o parcialmente los sistemas y registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar tal clase de contabilidad, no implica imprecisión, pues el vocablo "oculte", que constituye el verbo rector del tipo, no provoca confusión ni es ambiguo, incierto o impreciso, pues sus acepciones no dejan en incertidumbre al gobernado, ya que lo que sanciona el precepto legal es dejar fuera del ámbito de disposición de la autoridad fiscal los sistemas y registros contables, lo que puede acontecer cuando se escondan, tapen, o bien, se encubran a la vista; de ahí que se configurará el antisocial si el agente no da a conocer o no pone a la vista los sistemas y registros contables, así como la documentación relativa a los asientos respectivos, que conforme a las leyes fiscales esté obligado a llevar.

Amparo directo en revisión 1057/2012. 23 de mayo de 2012. Unanimidad de cuatro votos. Ausente y ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea; en su ausencia hizo suyo el asunto Jorge Mario Pardo Rebolledo. Secretaria: Carmina Cortés Rodríguez.

Época: Décima Época

Registro: 2001291

Instancia: Primera Sala

Tipo de Tesis: Aislada

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Libro XI, Agosto de 2012, Tomo 1

Materia(s): Constitucional

Tesis: 1a. CLXVII/2012 (10a.)

Página: 481

El día 17 de junio de 2016 se publicó en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación el “Decreto por el que se reforman, adicionan y derogan diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales; del Código Penal Federal; de la Ley General Del Sistema Nacional de Seguridad Pública; de la Ley Federal para la Protección a Personas que intervienen en el Procedimiento Penal; de la Ley General para Prevenir y Sancionar los Delitos en Materia de Secuestro, Reglamentaria de la fracción XXI del artículo 73 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley de Amparo, Reglamentaria de los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, de la Ley Federal de Defensoría Pública, **del C.F.F.** y de la Ley de Instituciones de Crédito”.



Esta reforma a diez ordenamientos en materia penal, pretende crear un marco jurídico sólido y moderno que se encuentre armonizado con el nuevo sistema de justicia penal de corte acusatorio y oral instaurado en la reforma constitucional del pasado 18 de junio de 2008.



En esta reforma al CFF, se centra en las facultades de las autoridades fiscales para obtener datos para la investigación de delitos fiscales, modificando también la terminología del citado Código a fin de armonizarlo con las disposiciones del nuevo sistema penal acusatorio, asimismo, se incluyen las figuras de providencias precautorias y medidas cautelares.





Fundamento jurídico reformado.

Artículo 92.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrá **EL CARÁCTER DE VÍCTIMA U OFENDIDA EN LOS PROCEDIMIENTOS PENALES** y juicios relacionados con delitos previstos en este Código. Los abogados hacendarios podrán actuar como asesores jurídicos dentro de dichos procedimientos.

...

I. ...

II. Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo sufrir perjuicio en lo establecido en los artículos 102, 103 y 115.

III. ...

...

Los procesos por los delitos fiscales a que se refieren las tres fracciones de este artículo **SE SOBRESEERÁN A PETICIÓN DE LA SECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, cuando los imputados paguen las contribuciones originadas por los hechos imputados, las sanciones y los recargos respectivos, o bien esos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de la propia Secretaría. La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el Ministerio Público Federal y el asesor jurídico formulen el alegato de clausura, y surtirá efectos respecto de las personas a que la misma se refiera.

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con el fin de formular ante el Ministerio Público el requisito de procedibilidad que corresponda, podrá allegarse de los datos necesarios para documentar hechos probablemente constitutivos de delitos fiscales.

...

Al resolver sobre las providencias precautorias la autoridad competente tomará como base la cuantificación anterior, adicionando la actualización y recargos que haya determinado la autoridad fiscal a la fecha de que se ordene la providencia. En caso de que el imputado no cuente con bienes suficientes para satisfacer la providencia precautoria, el juez fijará en todos los casos una medida cautelar consistente en garantía económica por el mismo monto que correspondería a la providencia precautoria. En el caso de que al imputado se le haya impuesto como medida cautelar una garantía económica y, exhibida esta sea citado para comparecer ante el juez e incumpla la cita, se requerirá al garante para que presente al imputado en un plazo no mayor a ocho días, advertidos, el garante y el imputado, de que si no lo hicieren o no justificaren la incomparecencia, se hará efectiva a favor del Fisco Federal.

Para efectos de la condena a la reparación del daño, la autoridad competente deberá considerar la cuantificación referida en este artículo, incluyendo la actualización y los recargos que hubiere determinado la autoridad fiscal a la fecha en la que se dicte dicha condena.

En caso de que el imputado hubiera pagado el interés fiscal a entera satisfacción de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la autoridad judicial, a solicitud del imputado, podrá considerar dicho pago para efecto de la determinación de **providencias precautorias, la imposición o modificación de las medidas cautelares.**

...

...



En lo concerniente a la reforma del primer párrafo del citado artículo 92, se establece a la SHCP, como víctima u Ofendido, toda vez que esta, es el representante de la sociedad mexicana, siendo necesaria la reparación del daño.

Su fundamento principal es el hecho de que al aprovecharse o defraudar a la SHCP, el dinero perdido es del erario público, siendo este a su vez de los mexicanos.

TIPOS DE MEDIDAS CAUTELARES

A solicitud del ministerio público o de la víctima u ofendido, el juez podrá imponer al imputado una o varias de las siguientes medidas cautelares:

- La presentación periódica ante el juez o ante autoridad distinta que aquél designe;
- La exhibición de una garantía económica;
- El embargo de bienes;
- La inmovilización de cuentas y demás valores que se encuentren dentro del sistema financiero;
- La prohibición de salir sin autorización del país, de la localidad en la cual reside o del ámbito territorial que fije el juez;
- El sometimiento al cuidado o vigilancia de una persona o institución determinada o internamiento a institución determinada;
- La prohibición de concurrir a determinadas reuniones o acercarse a ciertos lugares;
- La prohibición de convivir, acercarse o comunicarse con determinadas personas, con las víctimas u ofendidos o testigos, siempre que no se afecte el derecho de defensa;
- La separación inmediata del domicilio;

- La suspensión temporal en el ejercicio del cargo cuando se le atribuye un delito cometido por servidores públicos;
- La suspensión temporal en el ejercicio de una determinada actividad profesional o laboral; La colocación de localizadores electrónicos;
- El resguardo en su propio domicilio con las modalidades que el juez disponga, o
- La prisión preventiva.
- Las medidas cautelares no podrán ser usadas como medio para obtener un reconocimiento de culpabilidad o como sanción penal anticipada

No ejercicio de la acción Antes de la audiencia

Artículo 255. No ejercicio de la acción Antes de la audiencia inicial, el Ministerio Público previa autorización del Procurador o del servidor público en quien se delegue la facultad, podrá decretar el no ejercicio de la acción penal cuando de los antecedentes del caso le permitan concluir que en el caso concreto se actualiza alguna de las causales de sobreseimiento previstas en este Código. La determinación de no ejercicio de la acción penal, para los casos del artículo 327 del presente Código, inhibe una nueva persecución penal por los mismos hechos respecto del indiciado, salvo que sea por diversos hechos o en contra de diferente persona. Artículo 256. Casos en que operan los criterios de oportunidad Iniciada la investigación y previo análisis objetivo de los datos que consten en la misma, conforme a las disposiciones normativas de cada Procuraduría, el Ministerio Público, podrá abstenerse de ejercer la acción penal con base en la aplicación de criterios de oportunidad, siempre que, en su caso, se hayan reparado o garantizado los daños causados a la víctima u ofendido.

Reforma del 18 de junio de 2016

artículo 211. etapas del procedimiento penal

El procedimiento penal comprende las siguientes etapas:

La de investigación, que comprende las siguientes fases:

- a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querrela u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e
- b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación;

La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y

La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento.

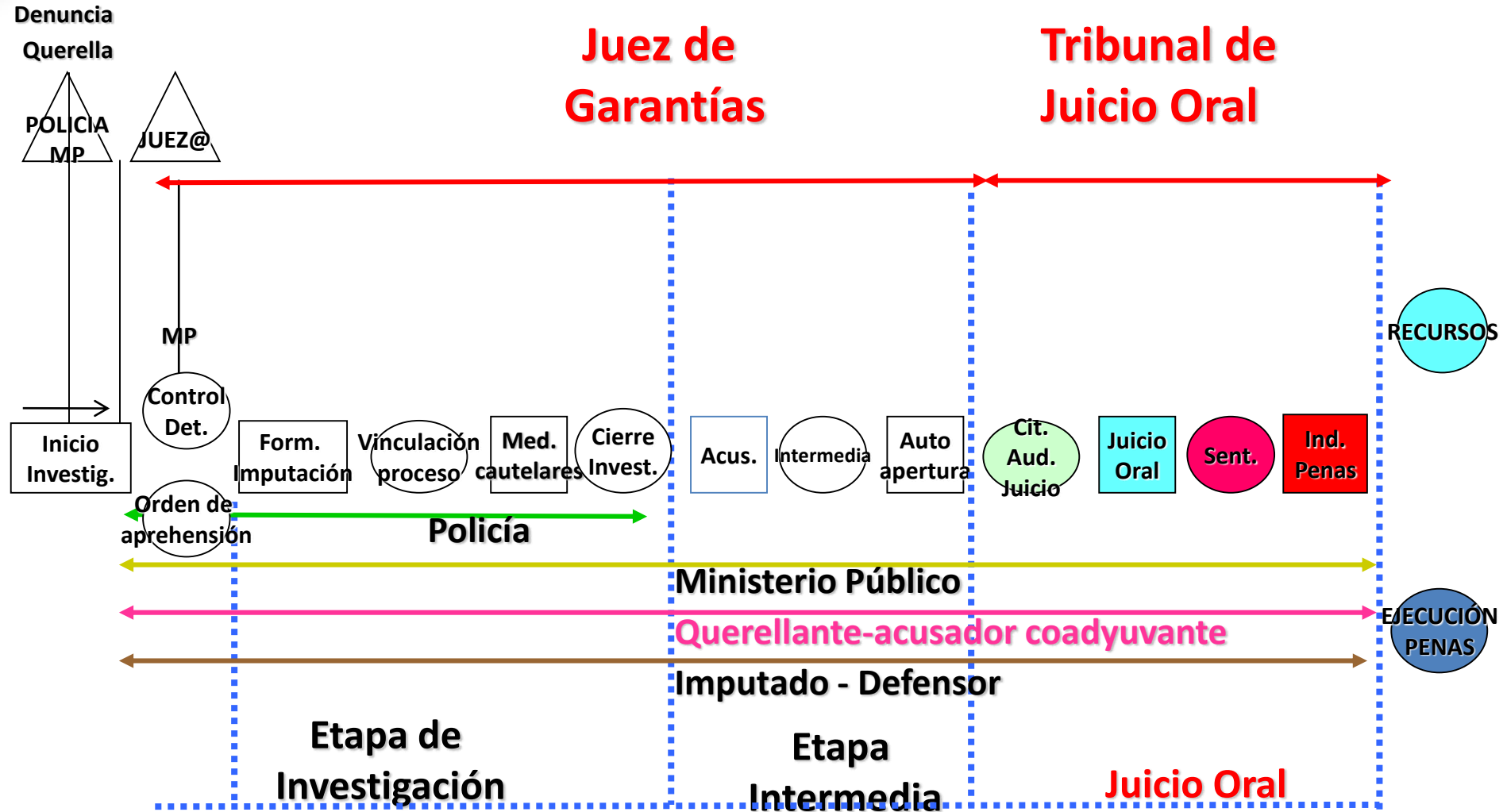
artículo 44. oralidad de las actuaciones procesales

Las audiencias se desarrollarán de forma oral, pudiendo auxiliarse las partes con documentos o con cualquier otro medio. En la práctica de las actuaciones procesales se utilizarán los medios técnicos disponibles que permitan darle mayor agilidad, exactitud y autenticidad a las mismas, sin perjuicio de conservar registro de lo acontecido.

El Órgano jurisdiccional propiciará que las partes se abstengan de leer documentos completos o apuntes de sus actuaciones que demuestren falta de argumentación y desconocimiento del asunto.

Sólo se podrán leer registros de la investigación para apoyo de memoria, así como para demostrar o superar contradicciones; la parte interesada en dar lectura a algún documento o registro, solicitará al juzgador que presida la audiencia, autorización para proceder a ello indicando específicamente el motivo de su solicitud conforme lo establece este artículo, sin que ello sea motivo de que se reemplace la argumentación oral.

PROCEDIMIENTO ORDINARIO



Pero no debe pasar inadvertido que ambas expresan:

- a) El reconocimiento expreso del más alto tribunal de la Nación sobre la función única y exclusiva del MPF como órgano facultado para investigar y perseguir la comisión de delitos. - facultad que no es respetada por el artículo 42 párrafo primero del CFF, **ya que las autoridades fiscales por ningún motivo pueden comprobar la comisión de delitos** –
- b) Que a la SHCP corresponde el deber de verificar el cumplimiento de obligaciones fiscales. (no de comprobar delitos como lo dice el párrafo primero del art. 42 del CFF)
- c) Que los hechos conocidos por la mencionada Secretaría durante una revisión fiscal solo deben presentarse **como posibilidad de la comisión de delitos** (nunca como hechos probados) ejemplo art 69 B CFF
- d) Y que ninguna de las dos tesis de jurisprudencia ni admiten ni niegan la procedencia de la querella tratándose de resoluciones que se impugnaron oportunamente.

LA PRESENTACIÓN DE LA QUERRELLA CUANDO SE IMPUGNÓ OPORTUNAMENTE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINÓ EL CRÉDITO FISCAL. Dos ideas importantísimas quedan por comentar respecto de la querella; la primera relacionada con la **FORMA DE DESCRIBIR LOS HECHOS QUE SE ESTIMAN DELICTIVOS**, puesto que no deben calificarse anticipadamente por la parte querellante, lo que conduce a que la calificativa será materia de estudio y decisión del juez penal que conozca del asunto.

La segunda con respecto a lo establecido en el artículo 92 fracción I del C.F.F., se comenta que si bien es cierto se ha dicho que el procedimiento penal derivado de la práctica de una visita domiciliaria es autónomo e independiente del procedimiento administrativo de revisión fiscal y que por ello pueden caminar ambos en cuerdas separadas y llegar a sus consecuencias, también lo es que de conformidad con las tesis aisladas pronunciadas por los Tribunales Colegiados de Circuito del Poder Judicial de la Federación **ES DE ACEPTARSE QUE LOS ELEMENTOS DE LA DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA NO SE ACREDITAN CUANDO SE IMPUGNA OPORTUNAMENTE LA RESOLUCIÓN QUE DETERMINO EL CRÉDITO FISCAL**, y esta es la gran diferencia con el contenido de las tesis P/J 92/2000 Y P/J 130/2000 que ya fueron expuestas.

Tesis aislada Materia(s): Penal Novena Época Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo: IV, Diciembre de 1996 Tesis: XIV.2o.44 P Página: 385

DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. NO SE ACREDITAN SUS ELEMENTOS CUANDO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN LA REVISIÓN DEL CRÉDITO FISCAL. Los elementos típicos del delito de defraudación fiscal equiparada previsto en el artículo 109, fracción V, del C.F.F., son: a) Que se omita presentar por más de seis meses la declaración de un ejercicio que exijan las leyes fiscales; y b) Que por esta omisión se deje de pagar la contribución correspondiente. Ahora bien, de la descripción anotada se desprende que para que se **colme a cabalidad el segundo de dichos supuestos, es menester demostrar en forma fehaciente que el contribuyente realmente tiene la obligación fiscal que se le reclama,** pero tal elemento **NO SE ACTUALIZA CUANDO SE IMPUGNA OPORTUNAMENTE** la resolución que determinó el crédito fiscal por el ejercicio revisado y, al formularse la querella respectiva, la reclamación se encuentra pendiente de resolver, pues en tal supuesto, ante el desconocimiento de la existencia de la obligación tributaria del reo, no puede determinarse si el segundo de los elementos indicados se encuentra acreditado o no.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL DÉCIMO CUARTO CIRCUITO.

Amparo directo 412/96. Roberto Borge Martín. 10 de octubre de 1996. Unanimidad de votos. Ponente: Raquel Aldama Vega. Secretario: Gabriel A. Ayala Quiñones.

También es aplicable al caso la conclusión alcanzada en la siguiente tesis aislada:

RESOLUCIONES FISCALES RESPECTO DE LAS QUE AÚN SE ENCUENTRA PENDIENTE UN RECURSO, NO SON IDÓNEAS PARA SUSTENTAR UNA QUERELLA. Tratándose de una resolución administrativa en materia fiscal, en la que se finca un crédito por omisión de impuestos, es menester que **HAYA CAUSADO ESTADO** para que pueda erigirse válidamente como un medio probatorio, en el ámbito penal y sustento de la querella respectiva, pues si la ley administrativa, la cual el Juez Penal debe respetar, prevé en ese procedimiento una serie de formalidades tendentes a que el causante pueda hacer uso de su derecho a la defensa, es evidente que debe haberse **AGOTADO EL REFERIDO PROCEDIMIENTO AL MENOS EN LA VÍA ORDINARIA.**

De ahí que si una resolución de la aludida autoridad fiscal que finca un crédito, por omisión de impuestos al causante, aún no ha causado estado por encontrarse **pendiente de resolverse el recurso respectivo intentado por ese causante**, o por no haber transcurrido todavía el término que la ley de la materia concede para la interposición de tal recurso, es claro que tal resolución aún no es idónea para invocarla como medio de prueba para establecer que el causante ha omitido el pago de sus impuestos correspondientes, pues considerar **LO CONTRARIO EQUIVALDRÍA A CONCULCAR LA GARANTÍA DE LEGALIDAD EN AGRAVIO DEL CAUSANTE**. Lo anterior sin perjuicio de que el juzgador, llegado el caso, conserve su plena autonomía y jurisdicción para valorar la citada resolución administrativa.

PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Amparo en revisión 777/97. Joaquín Castillo Becerra. 16 de marzo de 1998. Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Hugo Luna Ramos. Secretaria: Miriam Sonia Saucedo Estrella.

Véase: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo IV, diciembre de 1996, tesis XIV.2o.44 P, página 385, de rubro: "DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA. NO SE ACREDITAN SUS ELEMENTOS CUANDO SE ENCUENTRA PENDIENTE DE RESOLUCIÓN LA REVISIÓN DEL CRÉDITO FISCAL."

No. Registro: 196,180

Tesis aislada

Materia(s): Penal

Novena Época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: VII, Junio de 1998

Tesis: I.1o.P.41 P

Página: 703

RESPONSABILIDAD PENAL FISCAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LAS PERSONAS MORALES.

La Ley General de Sociedades Mercantiles en su artículo 10 dice: “la representación de toda sociedad mercantil corresponderá a su administrador o administradores, quienes podrán realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la sociedad, salvo lo que expresamente establezcan la ley y el contrato social...”; en relación el diverso 157 de la misma expresa: “ los administradores tendrán la responsabilidad inherente a su mandato y la derivada de las obligaciones que la ley y los estatutos les imponen.”

En el año de 1995 el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito emitió una tesis aislada con el rubro que abajo se muestra y que en lo sustancial ha servido durante toda la década para imputar la responsabilidad penal de los directores, gerentes, administradores, y demás representantes de las personas morales en la comisión de delitos fiscales:

PERSONAS MORALES, RESPONSABILIDAD PENAL DE LOS REPRESENTANTES DE LAS. No puede admitirse que carezcan de responsabilidad quienes actúan a nombre de las personas morales, pues de aceptarse tal argumento los delitos que llegaran a cometer los sujetos que ocupan los puestos de los diversos órganos de las personas morales, quedarían impunes, ya que las sanciones deberían ser para la persona moral, lo cual es un absurdo lógica y jurídicamente hablando, **pues las personas morales carecen de voluntad propia** y no es sino a través de las personas físicas como actúan. Es por esto que los directores, gerentes, administradores y demás representantes de la sociedad, **RESPONDEN EN LO PERSONAL DE LOS HECHOS DELICTIVOS QUE COMETAN EN NOMBRE PROPIO O BAJO EL AMPARO DE LA REPRESENTACIÓN CORPORATIVA.**

Dos razones importantes sustentaron la tesis de referencia:

- a) Que las personas morales carecen de voluntad propia y no es sino a través de las personas físicas como actúan.
- b) Que resulta ilógico en lo jurídico sancionar a la persona moral por lo que la responsabilidad por hechos delictivos recae en las personas físicas que ocupan los diversos órganos al amparo de la representación corporativa:

A su vez, el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito consideró (año de 1994) que la responsabilidad penal tratándose del delito de defraudación fiscal derivado de las declaraciones de impuestos, **RECAE DE MANERA DIRECTA EN EL ADMINISTRADOR DE LA EMPRESA POR TENER LA FACULTAD DE FIRMAR BAJO PROTESTA LOS FORMATOS RESPECTIVOS AUN CUANDO EXISTAN PERSONAS COMISIONADAS PARA SU FORMULACIÓN O LLENADO.**

Tesis VI. 2º. 28P, Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, página 594 de la parte II, octubre 1995, novena época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta:

DEFRAUDACIÓN FISCAL. RESPONSABILIDAD DEL ADMINISTRADOR DE UNA EMPRESA. CIRCUNSTANCIA NO EXCLUYENTE DE LA. Aun cuando existan personas comisionadas para la formulación o llenado de las declaraciones de impuestos, tal circunstancia **no exime de responsabilidad al administrador de la empresa, quien tiene las facultades para firmar, bajo protesta, los formatos de declaración respectivos.**

Cuarto tribunal colegiado en materia penal del primer circuito.

Amparo directo 184/93. José Garicoechea Echenique. 13 de mayo de 1993. Unanimidad de votos. Ponente: Alfonso Manuel Patiño Vallejo. Secretario: Francisco Fong Hernández.

Semanario Judicial, octava época, tomo XIV. Septiembre 1994. Tribunales colegiados pag. 301.

Así que la responsabilidad penal a que se refirió el Cuarto tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito se sostuvo en una argumentación eminentemente causalista <Teoría jurídico penal que se funda en aceptar que la consecuencia del acto o resultado en el delito es independiente de la intencionalidad del sujeto>, los simpatizantes de esta corriente como Beling, aceptan que el ilícito penal está desprovisto de todo carácter voluntario, **QUE EL TIPO PENAL ES LA CREACIÓN LEGISLATIVA Y QUE LA TIPICIDAD ES LA ADECUACIÓN DE LA CONDUCTA A LA NORMA CONCRETA POR CUANTO QUE EXISTA UN RESULTADO QUE CUMPLE CON ESA DISPOSICIÓN**, y es de ese modo que surge la antijuridicidad entendida como el encuadramiento del resultado con la descripción exacta del precepto. **EN OTRAS PALABRAS NO SE ATIENDE A LA VOLUNTAD SINO A LA RESPONSABILIDAD** emanada del cargo de Administrador de la persona moral, situación contraria a las actuales doctrinas sobre la imputación directa y objetiva tratándose del señalamiento de la responsabilidad penal.

CRITERIO ACTUAL SOBRE LA RESPONSABILIDAD PENAL FISCAL DE LOS ADMINISTRADORES DE LAS PERSONAS JURÍDICAS.

El Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito emitió en el presente año criterios importantes sobre la responsabilidad penal que analizamos; los 2 primeros que se muestran en relación **a la defraudación fiscal equiparada afirmando que la firma visible en la declaración fiscal no es el único elemento que debe valorarse para determinar al responsable del delito:**

Tipo de documento: Tesis aislada
Novena época
Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito
Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta
Tomo: XXVII, Enero de 2008
Página: 2769

DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I, DEL C.F.F. PARA ATRIBUIR RESPONSABILIDAD POR LA COMISIÓN DE ESTE DELITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA PERSONA MORAL, NO DEBE VALORARSE SÓLO SU FIRMA EN EL FORMATO DE DECLARACIÓN FISCAL, **SINO TAMBIÉN DEBE TOMARSE EN CUENTA EL CONJUNTO DE DATOS Y ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN ÉSTE.** Tratándose del delito equiparable al de defraudación fiscal, previsto por el artículo 109, fracción I, del C.F.F. consistente en que se consignen ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos al momento de presentar la declaración fiscal, la firma no es el único elemento que debe valorarse para determinar al responsable del delito, sino que también debe tomarse en cuenta el conjunto de elementos establecidos en el formato de declaración fiscal, pues éstos son los que permiten afirmar normativamente quién es la persona legalmente obligada a presentarla y, por tanto, responsable penalmente de lo consignado en ella, ya que en este tipo de ilícitos en que se actúa a nombre de otro, como en el caso de una persona moral, mediante la representación o el mandato legal, la responsabilidad penal no emerge de un dato ontológico (como lo es la realización de la acción concretizada a través de la presentación y firma de la declaración), sino de uno normativo (por disposición de la ley), regulado por el elemento "consignar",

pues tal vocablo se erige en un elemento de valoración jurídica del delito de suma importancia, que hace referencia al acto de asentar, expresar, declarar o proporcionar **DATOS EN LOS FORMATOS DE DECLARACIÓN FISCAL, COMO SON EL NOMBRE DE LA PERSONA MORAL A FAVOR DE QUIEN SE HACE EL PAGO DE LOS IMPUESTOS, EL NOMBRE DEL REPRESENTANTE LEGAL, ASÍ COMO EL REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES DE ÉSTE**, elementos que sirven, en tal caso, para determinar en forma indudable e incontrovertible a qué contribuyente corresponde y poder establecer jurídicamente quién es la persona que actuó en su nombre, máxime cuando se trata de una empresa con administrador general único, es decir, con representación legal y quien realizó dicha consignación de datos ante el fisco en términos de ley, **RAZÓN ÉSTA QUE CONFORME AL PRINCIPIO DE CULPABILIDAD Y RESPONSABILIDAD INDIVIDUAL LO VINCULA COMO NEXO DE ATRIBUIBILIDAD CON EL HECHO CONSUMADO Y, POR TANTO, AL QUE EN TAL SUPUESTO DE PRUEBA SE LE DEBERÁ ATRIBUIR LA COMISIÓN DEL DELITO**, al ser éste y no otro el que ejerció su obligación de presentar la declaración por mandato de aquélla y, por ende, quien tuvo el dominio de la acción materialmente verificada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 428/2006. 29 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Pérez Lozano. Secretario: Luis Enrique Zavala Torres.

Nota: Por instrucciones del Tribunal Colegiado de Circuito, la tesis que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXVI, noviembre de 2007, página 727, se publica nuevamente con la modificación en el precedente que el propio tribunal ordena.

DEFRAUDACIÓN FISCAL EQUIPARADA PREVISTA EN EL ARTÍCULO 109, FRACCIÓN I, C.F.F. PARA ATRIBUIR RESPONSABILIDAD POR LA COMISIÓN DE ESTE DELITO AL REPRESENTANTE LEGAL DE UNA PERSONA MORAL, NO DEBE VALORARSE SÓLO SU FIRMA EN EL FORMATO DE DECLARACIÓN FISCAL, SINO TAMBIÉN DEBE TOMARSE EN CUENTA EL CONJUNTO DE DATOS Y ELEMENTOS ESTABLECIDOS EN ÉSTE. Tratándose del delito equiparable al de defraudación fiscal, previsto por el artículo 109, fracción I, del C.F.F., consistente en que se consignen ingresos acumulables menores a los realmente obtenidos al momento de presentar la declaración fiscal, la firma no es el único elemento que debe valorarse para determinar al responsable del delito, sino que también debe tomarse en cuenta el conjunto de elementos establecidos en el formato de declaración fiscal, pues éstos son los que permiten afirmar normativamente quién es la persona legalmente obligada a presentarla y, por tanto, responsable penalmente de lo consignado en ella, ya que en este tipo de ilícitos en que se actúa a nombre de otro, como en el caso de una persona moral, mediante la representación o el mandato legal, la responsabilidad penal no emerge de un dato ontológico (como lo es la realización de la acción concretizada a través de la presentación y firma de la declaración), sino de uno normativo (por disposición de la ley), regulado por el elemento "consignar", pues tal vocablo se erige en un elemento de valoración jurídica del delito de suma importancia, que hace referencia al acto de asentar, expresar, declarar o proporcionar datos en los formatos de declaración fiscal, como son el nombre de la persona moral a favor de quien se hace el pago de los impuestos, el nombre del representante legal, así como el registro federal de contribuyentes de éste, elementos que sirven, en tal caso, para determinar

en forma indudable e incontrovertible a qué contribuyente corresponde y poder establecer jurídicamente quién es la persona que actuó en su nombre, máxime cuando se trata de una empresa con administrador general único, es decir, con representación legal y quien realizó dicha consignación de datos ante el fisco en términos de ley, razón ésta que conforme al principio de culpabilidad y responsabilidad individual lo vincula como nexo de atribuibilidad con el hecho consumado y, por tanto, al que en tal supuesto de prueba se le deberá atribuir la comisión del delito, al ser éste y no otro el que ejerció su obligación de presentar la declaración por mandato de aquélla y, por ende, quien tuvo el dominio de la acción materialmente verificada.

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL SEGUNDO CIRCUITO.

Amparo directo 428/2006. 29 de junio de 2007. Unanimidad de votos. Ponente: Andrés Pérez Lozano. Secretario: Enrique Zavala Torres.

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XXVI, Noviembre de 2007

Página: 727

La tesis siguiente incluye elementos importantes sobre la demostración de la intervención del presunto responsable a la luz del artículo 95 del C.F.F.

DELITOS FISCALES. LA IMPUTACIÓN DE LA RESPONSABILIDAD PENAL NO DERIVA PER SE DEL CARGO DE SOCIO, ADMINISTRADOR O APODERADO DE UNA PERSONA MORAL, SINO QUE ES NECESARIO DEMOSTRAR SU INTERVENCIÓN A TÍTULO DE AUTOR O PARTÍCIPE Y LA VINCULACIÓN DIRECTA O INDIRECTA DE SUS ACTOS EN LA COMISIÓN DE DICHOS ILÍCITOS. Tratándose de la perpetración de delitos de índole fiscal, el solo hecho de ser socio, administrador o apoderado de alguna persona moral resulta insuficiente para atribuirle responsabilidad penal, pues ésta no deriva per se del encargo u obligación que la Ley General de Sociedades Mercantiles le impone, sino que es necesario demostrar la intervención que tuvo a título de autor o partícipe de acuerdo con las hipótesis previstas por el artículo 95 del C.F.F., es decir, cuáles fueron los actos que desplegó y que le vinculan directa o indirectamente en la comisión del delito, pues sólo de esta manera se cumple con los principios de **nullum crime sine** conducta y de exacta aplicación de la ley previstos en el artículo 14 de la constitución federal.

Tesis II2oP. 224 P. no. de registro 170529, novena época, segundo tribunal colegiado en materia penal del segundo circuito, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXVII, enero de 2008, página 2770.

La tesis siguiente incluye elementos importantes sobre la demostración de la intervención del presunto responsable a la luz del artículo 95 del CFF.

Cabe destacar la referencia al principio de culpabilidad : “ principio de culpabilidad y responsabilidad individual vinculado como nexo de atribuidad con el hecho consumado y, por tanto, al que se le deberá atribuir la comisión del delito... al ser éste y no otro el que ejerció su obligación de presentar la declaración por mandato de aquélla y, por ende, quien tuvo el dominio de la acción materialmente verificada”.

Ratificando uno de los imperativos necesarios para imputar responsabilidad como acertadamente enuncia la tesis leída: "...cuáles fueron los actos que desplegados y que le vinculan directa o indirectamente en la comisión del delito..." esa es la cuestión fina y correcta de dilucidar en una causa penal fiscal.

DEFRAUDACIÓN A LOS RÉGIMENES DEL SEGURO SOCIAL. POR TRATARSE DE UN DELITO DEL ORDEN FEDERAL ES COMPETENTE PARA CONOCER DE ESTE ILÍCITO UN JUEZ DE DISTRITO DE PROCESOS PENALES FEDERALES. El delito de "defraudación a los regímenes del Seguro Social" se encuentra previsto y sancionado en una ley federal, concretamente en los numerales 307 y 308 de la Ley del Seguro Social, la cual fue expedida por el Congreso de la Unión y publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiuno de diciembre de mil novecientos noventa y cinco, y además, es de observancia general en toda la República, de conformidad con su artículo 1; por tanto, en acatamiento a los artículos 104, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 50, fracción I, inciso a), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, la competencia para conocer de este delito

(...) corresponde a un Juez Distrito de Procesos Penales Federales, por tratarse de un ilícito del orden federal, previsto en una ley de la misma naturaleza.

SÉPTIMO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA PENAL DEL PRIMER CIRCUITO.

Competencia 17/2006. Suscitada entre el Juzgado Sexto Penal del Distrito Federal y el Juzgado Sexto de Distrito de Procesos Penales Federales en el Distrito Federal. 2 de marzo de 2006. Unanimidad de votos. Ponente: Ricardo Ojeda Bohórquez. Secretario: Néstor Alexander Enríquez Gonzalez

Tipo de documento: Tesis aislada

Novena época

Instancia: Tribunales Colegiados de Circuito

Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta

Tomo: XXIII, Abril de 2006

Página: 989

LA DEFRAUDACIÓN FISCAL YA NO SE CONSIDERA DELITO GRAVE EN EL NUEVO CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

El párrafo tercero del artículo segundo transitorio del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 18 de junio del año de 2008, ordenó la creación del sistema penal acusatorio por lo que con fecha 5 de marzo del año de 2014, se publicó el Código Nacional de Procedimientos Penales y meses después su reforma del día viernes 17 de junio del año de 2016, presentando un nuevo catálogo de delitos graves y desincorporando de esa categoría a la defraudación fiscal calificada, por lo que a partir del 18 de junio de 2016, día en que inició la vigencia en todo el país del nuevo ordenamiento procesal penal, este delito ya no se sanciona con tal agravante, motivo para realizar este análisis.

ARTÍCULOS TRANSITORIOS QUE ESTABLECIERON LAS REGLAS DE SUSTANCIACIÓN LOS PROCEDIMIENTOS EN TRÁMITE CON MOTIVO DEL INICIO DE LA VIGENCIA DEL CÓDIGO NACIONAL DE PROCEDIMIENTOS PENALES.

El artículo tercero transitorio del decreto de fecha 5 de marzo del año 2014 dispuso que: " respecto de los procedimientos penales que a la entrada en vigor del presente ordenamiento se encuentren en trámite, continuarán su sustanciación de conformidad con la legislación aplicable en el momento del inicio de los mismos." En concordancia, el decreto de reformas y adiciones a diversas leyes, de fecha 17 de junio de 2016 estableció en su artículo segundo transitorio: " Los procedimientos que se encuentren en trámite, relacionados con las modificaciones a los preceptos legales contemplados en el presente Decreto, se resolverán de conformidad con las disposiciones que les dieron origen."

De tal manera que como hemos visto, ni el Código Nacional de Procedimientos Penales, así como tampoco el Código Penal Federal contemplan en su catálogo de delitos que AMERITAN PRISIÓN OFICIOSA AL DELITO DE DEFRAUDACIÓN FISCAL; y tampoco le atribuye el carácter de delito grave la ley contra la seguridad de la Nación, el libre desarrollo de la personalidad y de la salud

[bibliografia](#)

[gregorio rodríguez mejía](#)

- 1 Margain Manautou, Emilio, Introducción al estudio de derecho tributario mexicano, Universidad Autónoma de San Luis Potosí, 1969, pp. 324 y ss.
- 2 Lomelí Cerezo, Margarita, Derecho fiscal represivo, México, Porrúa, 1979, p. 183.
- 3 Lomelí Cerezo, Margarita, op. cit., p. 185.
- 4 Garza, Sergio Francisco de la, Derecho financiero mexicano, México, Porrúa, 1981, p. 498.
- 5 Véase al respecto Herach, Dino, Curso superior de derecho tributario, Buenos Aires, Liceo Profesional Cima, t. I., pp. 193 y ss.
- 6 Cita de González Bustamante, Juan José, Principios de derecho procesal penal mexicano, México, Porrúa, 1967, p. 39.

Bibliografía

El contenido fue obtenido del ensayo titulado “Infracciones y Delitos fiscales” preparado por Dr. Gregorio Rodríguez Mejía. Instituto de Investigaciones Jurídicas UNAM.; así como apuntes denominado “Análisis de la reforma Penal Fiscal” del Lic. Andrés Mateos (El fiscalista de México) y, Leyes y Códigos vigentes.

Cualquier error o impresión en el entendimiento del trabajo desarrollado por el Dr. Gregorio y Lic Andrés es imputable en forma exclusiva al expositor de este curso.



www.imefi.com

Gracias!!



Doctorando José Manuel Miranda de Santiago.
mmiranda@preciosdetransferencia.com.mx
WhatsApp. 5521233889